

Máster Universitario en Abogacía
2020/2021

TRABAJO FIN DE MASTER DE ORIENTACIÓN INVESTIGADORA

**EL NEXO DE CAUSALIDAD EN LOS ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN. EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY
35/2015.**

Autora: Ana Gálvez Molina

Tutora: María José Peñalosa Revidiego

En Sevilla, a 18 de febrero de 2021

INDICE

1. Introducción y justificación del trabajo. (página 3)
2. Objetivos. (página 5)
3. La responsabilidad derivada del accidente de circulación. (página 5)
4. El artículo 135 de la Ley 35/2015, los “criterios de causalidad genérica”. (página 15)
 - 4.1. Los traumatismos menores de la columna vertebral. (página 17)
 - 4.1.1. Las lesiones temporales. (página 18)
 - 4.1.1.1. Perjuicio personal básico. (página 19)
 - 4.1.1.2. Perjuicio personal particular. (página 20)
 - 4.1.1.3. Perjuicios patrimoniales. (página 21)
 - 4.2. El informe médico concluyente. (página 22)
5. Análisis de los “criterios de causalidad genérica”. (página 25)
 - 5.1. Criterio de exclusión. (página 28)
 - 5.2. Criterio cronológico. (página 29)
 - 5.3. Criterio topográfico. (página 32)
 - 5.4. Criterio de intensidad. (página 33)
 - 5.4.1. Las colisiones por alcance y a baja velocidad. (página 35)
 - 5.4.2. El informe biomecánico. (página 43)
6. Aplicación práctica de los “criterios de causalidad genérica”. (página 48)
7. La oferta motivada. (página 49)
8. Conclusiones. (página 55)
9. Bibliografía. (página 56)
10. Anexo I: Jurisprudencia.
11. Anexo II: Informe de Oferta Motivada.
12. Anexo III: Informe de Oferta Motivada con discusión de nexo causal.

Resumen.

El presente Trabajo de Fin de Máster intenta dar una visión panorámica del nexo de causalidad en los accidentes de tráfico, valorando desde los aspectos más generales, a los más casuísticos. Finalmente, se centra en los traumatismos menores de columna a los que se refiere el artículo 135 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de Reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Se examinarán sus diferentes consecuencias, deteniéndonos en los criterios de causalidad genérica y abordando su reflejo en el campo indemnizatorio, así como los medios de prueba empleados en este tipo de procedimientos. Desgranando la legislación y jurisprudencia aplicable a estos supuestos, veremos los pasos a seguir desde que se produce el accidente en el que se provoca el traumatismo.

Palabras clave: Nexo de causalidad, traumatismo menor de columna, latigazo cervical, artículo 135, responsabilidad extracontractual.

Abstract.

This Master's thesis attempts to give a panoramic view of the causal link in traffic accidents, assessing from the most general aspects to the most casuistic ones. Finally, it focuses on the minor spinal injuries referred to in article 135 of Law 35/2015, of 22 September, on the Reform of the system for the assessment of damages caused to persons in traffic accidents. Its different consequences will be examined, focusing on the criteria of generic causality and addressing its reflection in the field of compensation, as well as the means of proof used in this type of proceedings. We will look at the legislation and jurisprudence applicable to these cases and the steps to be followed from the moment the accident in which the injury is caused.

Keywords: Causal link, minor spinal trauma, whiplash, article 135, non-contractual liability.

1. Introducción y justificación del trabajo.

Este trabajo se centra en un estudio amplio del artículo 135 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (en adelante, Ley 35/2015).

Podríamos decir que más que elegir yo sobre qué versaría mi Trabajo de Fin de Máster, ha sido él el que me eligió a mí. Quise buscar un tema relacionado con los accidentes de tráfico por una experiencia que yo había tenido y que no conseguí entender muy bien. Hace ya 10 años, sufrí un grave accidente de tráfico como ocupante de un automóvil y llegado el momento de negociar las indemnizaciones con la aseguradora del vehículo, se aceptó una reducción del 25% del montante de las indemnizaciones en base a que no hacía uso en ese momento del cinturón de seguridad. Por tanto, se consideró que había contribuido, no a la producción del accidente, pero sí a la entidad de las lesiones que padecí y secuelas que me quedaron. Eso me llevó a querer profundizar en el estudio del nexo causal y la posible concurrencia de causas, pero a medida que profundizaba en el estudio, me pareció que era mucho más práctico y más interesante el concreto estudio del artículo 135 de la Ley 35/2015, ya que introduce un tratamiento novedoso del nexo causal en relación a los traumatismos leves de columna y además, es uno de los casos más frecuentes de lesiones y reclamaciones que se suelen producir, puesto que tienen lugar en accidentes a baja velocidad, que es lo que ocurre en la mayoría de los accidentes dentro de población – si exceptuamos los atropellos a peatones o ciclistas -.

Además, el estudio de los pasos a seguir para el tratamiento de estos casos es común a este y a cualquier otra reclamación que se inicie por lesiones derivadas de accidentes de tráfico. De esta manera, he acabado haciendo un estudio que se ha concretado en el artículo 135 de la Ley 35/2015.

Así, como hemos mencionado, el precepto ha introducido un cambio en el tratamiento jurídico de los traumatismos menores de columna, que son las lesiones más reiterativas en los accidentes de tráfico de intensidad baja o media y la fuente de las reclamaciones fraudulentas más frecuentes al tratarse de lesiones que no pueden constatarse por medios objetivos de diagnóstico. Para acabar con esas reclamaciones fraudulentas se regula el nexo de causalidad de forma expresa, estableciendo unos criterios que deben concurrir para considerarse que haya nexo causal entre el accidente y las lesiones por las que se reclama.

En la aplicación práctica del artículo 135 de la Ley 35/2015 veremos cómo inciden aspectos jurídicos, médicos, mecánicos, sociales, y prácticos entre otros. Por este motivo, a lo largo de este trabajo se intentará examinar y hacer referencia a todos esos aspectos, ya que todos coadyuvan y confluyen en la aplicación práctica del mismo.

En su aspecto más práctico, esta nueva regulación ha venido a introducir un cambio fundamental en relación con los traumatismos menores de columna. Hasta la publicación de la Ley 35/2015, en materia de las indemnizaciones por lesiones se presumía la culpa del conductor único implicado o del conductor del vehículo contrario, exonerándose el conductor, y consecuentemente su aseguradora, de indemnizar únicamente si demostraba la culpa exclusiva de la víctima o la fuerza mayor extraña al funcionamiento del vehículo. A partir de la Ley 35/2015, solo se indemnizarán esos traumatismos leves de columna si cumplen los criterios establecidos en el artículo 135. En consecuencia, si la aseguradora alega y presenta un principio de prueba de la no concurrencia de uno de esos criterios, será la víctima-reclamante quien deberá probar que esas lesiones son consecuencia del accidente. Este cambio legislativo ha invertido el riesgo de que prospere, o no, una reclamación judicial por lesiones o traumatismos leves de columna.

Bajo la regulación anterior, a las aseguradoras les interesaba más indemnizar, aunque considerasen que la reclamación era desorbitada o fraudulenta, porque los riesgos de ser condenados al pago de esas indemnizaciones incrementados en los gastos de defensa, representación y en los intereses moratorios, podían ser iguales o superiores a la cantidad que podría dejar de pagar si prosperaba su alegación de tratarse de una reclamación fraudulenta.

Tras la Ley 35/2015, se limitan las cantidades a reclamar a los estándares de curación y además se dan a las aseguradoras armas para combatir los fraudes y las reclamaciones “infladas” de las víctimas de accidentes de tráfico.

En la práctica, desde el punto de vista de los usuarios de la justicia y las víctimas de accidentes de tráfico y desde la perspectiva de un abogado defensor de las víctimas frente a las aseguradoras, lo que se han reducido son las garantías jurídicas de las víctimas de accidentes en pro de una mayor protección de las aseguradoras.

2. Objetivos.

El objetivo del presente trabajo es entender y explicar el funcionamiento y aplicación del necesario nexo de causalidad en los accidentes de tráfico. Atendiendo a este objetivo, hemos considerado primordial seguir una metodología basada en el estudio de cada uno de los preceptos, conceptos, factores, criterios e interpretación judicial que intervienen tanto en la responsabilidad extracontractual - punto de partida -, como en el nexo de causalidad - tema central -.

3. La responsabilidad derivada del accidente de circulación.

La responsabilidad civil es la obligación de indemnizar o resarcir los perjuicios o consecuencias lesivas causadas a otros en su persona, intereses o patrimonio por la actuación

propia o ajena, ya lo sea por el incumplimiento contractual o por los daños producidos por culpa o negligencia.

Los daños y lesiones causados con ocasión de un accidente de tráfico en el campo del derecho civil se incardinan en el ámbito del artículo 1902 del Código Civil - que establece que “el que por acción y omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”¹ -, pero también tienen su regulación específica². En los últimos años se han producido modificaciones importantes que inciden en la responsabilidad civil derivada de los accidentes de circulación. Haciendo especial mención a la Ley 35/2015, que modifica el baremo para el cálculo de las indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico, aumentando en muchos casos las cuantías de las indemnizaciones, introduciendo nuevos perjudicados, regulando un nuevo sistema de tramitación de las indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico que se inicia por una reclamación previa y que debe ir seguido de una oferta o respuesta motivada, también se ha introducido la posibilidad de recurrir a la mediación. Esta Ley introduce una regulación expresa del nexo de causalidad en relación con los traumatismos leves de columna en su artículo 135, en el que se centra el presente trabajo.

¹ (artículo 1902, Código Civil).

² Entre otras, la Directiva de La Unión Europea 2015/413, de 11 de marzo; la Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; la Ley 50/80, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro; el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación; la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre; el Real Decreto 818/2008, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores; el Real Decreto 1507/2008, de 12 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos a Motor; la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación; el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.

El artículo 1902 del Código Civil requiere, por su propia interpretación gramatical, la existencia de una acción u omisión que ha de ser culpable o negligente. Asimismo, requiere – de forma expresa – el que se cause un daño a otro. Lógicamente y, aunque el artículo no lo diga expresamente, es necesario que ese daño causado a un tercero sea consecuencia de una acción culpable o negligente, constituyendo éste el tercer elemento imprescindible para que se genere una culpa extracontractual: el nexo causal (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoséptima, núm. 236/2020, de 22 de octubre -RJ 950/2019-³*).

Así pues, para que se dé la culpa extracontractual del artículo 1902 del Código Civil, deben concurrir tres requisitos (*véase el Fundamento de Derecho Segundo de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Catorceava, núm. 317/2020, de 18 de noviembre -RJ 944/2018-*):

- Un requisito subjetivo: una acción u omisión, culpable o negligente.
- Un requisito objetivo: la existencia de un daño o lesión.
- Un nexo causal entre los dos requisitos anteriores.

El artículo 1902 parte de un principio culpabilista, pero en materia de lesiones derivadas de accidentes de tráfico se invierte la carga de la prueba y se presume la culpa en base a considerar que al conducir un vehículo a motor se realiza una actividad de riesgo para los demás⁴.

³ Recomendamos su lectura por lo ilustrativa que resulta, ya que en ella se recoge y se hace referencia a la Doctrina Jurisprudencial aplicable a esta materia.

⁴ En este sentido, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sección Segunda, núm. 134/2020, de 24 de abril -RJ 134/2020- recoge en su Fundamento de Derecho Segundo: “La jurisprudencia se apoya en la actualidad en una presunción de culpa, que lleva consigo la inversión de la carga de la prueba, ya que será el causante del daño quien tenga que aportar la de su diligencia o previsión, consagrando de esta manera el criterio

El nexo causal en las indemnizaciones derivadas de accidente de tráfico nace por elaboración doctrinal y jurisprudencial al estudiar y aplicar el artículo 1902 del Código Civil. El Ordenamiento Jurídico español y su aplicación por los Tribunales de Justicia ha evolucionado desde un concepto de culpa subjetivista a un concepto objetivo de culpa que nació - o comenzó a aplicarse - en aquellas actividades que suponían un riesgo para la colectividad, tales como el tráfico de vehículos a motor o el uso de armas. Responsabilidad objetiva que es excepcional en nuestro Ordenamiento y que debe venir expresamente así establecida, de ahí que la evolución jurisprudencial haya ido plasmando esa transformación del principio subjetivista hacia pautas propias de la responsabilidad objetiva sin que ello pueda obviar la aplicación del principio básico de responsabilidad por culpa, que requiere un acto dañoso antijurídico, que el mismo derive de una culpa o negligencia del agente y, por supuesto, un tercer elemento que es el objeto de estudio por parte de este trabajo, que es la existencia de un enlace entre los otros dos elementos: el nexo causal.

Así pues, hay que insistir en unas premisas básicas y fundamentales: la materia relativa a los accidentes en que intervengan vehículos a motor tiene una regulación específica y diferenciada que mantiene las bases de la legislación civil de que partió, manteniendo una exigencia común ineludible, que es que quien pretenda reclamar una indemnización por daños materiales o por lesiones derivadas de un accidente de tráfico deberá acreditar la existencia de los tres elementos que integran el artículo 1902 del Código Civil. Tal y como afirma Peña, M. (2019):

La objetivación de la responsabilidad en esta materia no libera a quien demanda de la carga de probar la existencia del accidente y del resultado lesivo, así

de la responsabilidad por riesgo que prescinde de la culpa de las personas que manejan vehículos de motor, pues éstos de por sí implican un riesgo para terceras personas, suficiente para acarrear y exigir responsabilidad (...)"

como el nexo de causalidad entre éste y una acción u omisión apta para ello, al tratarse de hechos constitutivos de su pretensión que quedan, por lo tanto, sujetos al régimen general sobre distribución de la carga probatoria que establece el artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (p. 19).

El tratamiento de la “culpa” es diferente para las distintas consecuencias de un accidente de tráfico (*véase la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 536/2012, de 10 de septiembre -RJ 1740/2009-*). En materia de daños materiales la culpa debe ser probada por quien reclame, mientras que en materia de lesiones se presume la culpa. No obstante, como trataremos más adelante, se puede eximir el conductor probando que el daño corporal se produce por la culpa exclusiva de la víctima o por fuerza mayor extraña a la conducción, pero también se admite la concurrencia de causas: culpa de conductor y de la víctima. Pese a este diferente tratamiento, siempre se parte de la necesidad de que se dé la concurrencia de los tres elementos que integran la culpa extracontractual y que ya han sido expuesto con anterioridad.

La evolución jurisprudencial ha venido marcada por diferentes hitos. Así, ya la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de Octubre de 1.990 -RJ 1990/8053-, recogió en su Fundamento Segundo:

Es preciso aplicar la doctrina jurisprudencial definitoria del principio de la causación adecuada, que exige, para apreciar la culpa del agente, que el resultado sea consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad; debiéndose entender por consecuencia natural, aquella que propicia, entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad, conforme a conocimientos normalmente aceptados; debiendo valorarse en cada caso concreto, si el acto antecedente, que se presenta como causa, tiene virtualidad suficiente para que del

mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido; no siendo posible las simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos, que por una mera coincidencia induzcan a pensar en una posible inclusión (F.D.2º)⁵.

La presunción de la culpa o negligencia en el conductor causante de las lesiones supone la consagración de la responsabilidad cuasi-objetiva (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, núm. 316/2019, de 3 de octubre -RJ 369/2019-*). No obstante⁶, como ya hemos adelantado anteriormente, el conductor podrá exonerarse si demuestra⁷ que el accidente se debió a negligencia o culpa exclusiva del perjudicado, o a una fuerza mayor que sea extraña al funcionamiento del vehículo o a la conducción⁸ (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, Sección Primera, número 252/2015, de 22 de junio -RJ 11/2015-*; *la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm.159/2020, de 10 de marzo -RJ 1449/2017-*; y *la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Tercera, núm. 226/2020, de 25 de julio -RJ 902/2018-*). Igualmente, quedará exonerado de responsabilidad cuando el demandante no acredite la relación de causalidad entre el siniestro y las lesiones y secuelas que son objeto de reclamación. En este sentido, es de aplicación lo recogido en el Fundamento de Derecho

⁵ Esta doctrina jurisprudencial se ha continuado aplicando por los Tribunales a lo largo de los años, como por ejemplo, vemos en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 100/2000, de 14 febrero -RJ 1460/1995- (F.D.2º); Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 701/2010, de 4 de noviembre -RJ 2051/2006- (F.D.7º); e igualmente, ha sido plasmada por la Jurisprudencia menor, así la recogen, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, Sección Cuarta, núm. 244/2017, de 29 de junio -RJ 231/2017-; y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Sexta, núm. 160/2018, de 20 de abril -RJ 70/2018-.

⁶ Atendiendo, entre otras, a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Primera, núm. 83/2016, de 19 de febrero -RJ 842/2015-, que recoge en su Fundamento de Derecho Segundo: “se consagra legislativamente, por tanto, una diferencia de trato procesal en función del resultado de la conducta causante del daño. Si se producen lesiones, “daños a las personas” en la terminología legal, el conductor del vehículo de motor sólo se exonera probando la culpa exclusiva o la existencia de fuerza mayor. Sigue el precepto la teoría del riesgo, modulada con la posibilidad, limitada, de exonerarse de responsabilidad en los dos supuestos que se relacionan”.

⁷ Lo aclara Peña, M. (2019) al indicar que: “las causas de exoneración de responsabilidad constituyen hechos excluyentes, impeditivos o extintivos cuya prueba corresponde a quien las alega.- como regla general, la aseguradora demandada.- conforme a lo establecido por el artículo 217.3 LEC”.

⁸ Artículo 1.1 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Tercero de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, núm. 121/2020, de 27 de mayo -RJ 37/2020-:

Debe resaltarse, como ya dijimos en la sentencia de esta sección de 3 de octubre de 2019 que la culpabilidad, en el ámbito de la responsabilidad por daños en la circulación de vehículos de motor, tiene un carácter cuasi-objetivo, pero la inversión de la carga de prueba no se extiende al nexo causal entre el hecho negligente y el daño causado. Correspondiendo a la parte demandante acreditar el concreto alcance del daño que se localiza en ambos demandantes en su columna vertebral (F.D.3º).

Estas excepciones han fluctuado en la jurisprudencia de forma que, en ocasiones, demostrando que hay una concurrencia de culpas – es decir, que ha intervenido culpa o negligencia tanto del conductor, como de la propia víctima – se ha llegado a una asunción por parte de cada uno de los intervinientes de una cuota de responsabilidad con la consiguiente repercusión en la indemnización⁹ (véase la *Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 701/2010 de 4 noviembre -RJ 2051/2006-*; la *Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 83/2010, de 22 de febrero -RJ 356/2007-*; y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Sexta, núm. 87/2020, de 27 de febrero -RJ 848/2019-*). La concurrencia de culpas puede ser no sólo porque ambos intervengan en la producción del accidente, sino que puede darse también que la conducta de

⁹ Así, la Ley 35/2015, reconoce esta posibilidad en su artículo 1.2, donde se aclara que, sin perjuicio de que pueda existir la culpa exclusiva, “cuando la víctima capaz de culpa civil sólo contribuya a la producción del daño se reducirán todas las indemnizaciones, incluidas las relativas a los gastos en que se haya incurrido en los supuestos de muerte, secuelas y lesiones temporales, en atención a la culpa concurrente hasta un máximo del setenta y cinco por ciento. Se entiende que existe dicha contribución si la víctima, por falta de uso o por uso inadecuado de cinturones, casco u otros elementos protectores, incumple la normativa de seguridad y provoca la agravación del daño”.

la víctima haya contribuido a que las lesiones tengan una mayor entidad¹⁰(véase la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Quinta, núm. 398/2020, de 10 de noviembre - RJ 427/2020-*).

Por lo tanto, esta concurrencia de culpas puede afectar, bien a las causas de producción del accidente - es decir, cuando ambos intervinientes incurren en culpa o negligencia (por ejemplo, un conductor no respeta una preferencia de paso y otro circula a un exceso de velocidad, o, por ejemplo, un conductor circula distraído y un peatón irrumpe de forma imprevista y por lugar no permitido en la calzada¹¹) —; o bien, pueden contribuir ambos a la magnitud de las lesiones (por ejemplo, la víctima no hacía uso del casco/cinturón obligatorio, o el lesionado no sigue las prescripciones y las pautas médicas que se le indiquen para su curación). (*Véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, núm. 475/2019, de 13 de noviembre - RJ 643/2018-*).

También, se ha llegado a exonerar de responsabilidad al conductor acreditando que actuó con la diligencia debida¹² por lo que entendemos que en nuestro Ordenamiento Jurídico, aunque se haya evolucionado hacia una objetivización de la responsabilidad, ésta no opera de forma absoluta. Así, en el artículo 1.1 de la Ley 35/2015 se recoge lo siguiente:

El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de éstos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad

¹⁰ Conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1.2 de la Ley 35/2015, que recoge: “Las reglas de los dos párrafos anteriores se aplicarán también si la víctima incumple su deber de mitigar el daño. La víctima incumple este deber si deja de llevar a cabo una conducta generalmente exigible que, sin comportar riesgo alguno para su salud o integridad física, habría evitado la agravación del daño producido y, en especial, si abandona de modo injustificado el proceso curativo”.

¹¹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, núm. 482/2020, de 9 de noviembre - 774/2019-.

¹² En atención a lo expuesto en el apartado segundo del artículo 1.1 de la Ley 35/2015, que aclara que únicamente “quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo”.

sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos¹³.

Según (Rivas, M^a. J., 2019, p.2) y, en relación con la temática del presente trabajo, el hecho de que sólo pueda exonerarse de responsabilidad en estos supuestos que hemos tratado y que se recogen en el precepto referenciado, “ha elevado a categoría la alegación recurrente de ruptura o inexistencia de nexo causal entre el siniestro y el daño personal por el que se reclama”. Si bien, no se debe olvidar que - como ya hemos mencionado -, el perjudicado igualmente debe acreditar la existencia de este daño sufrido y el nexo de causalidad con la acción u omisión capaz de causarlo¹⁴ (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Sexta, núm. 160/2018, de 20 abril -RJ 70/2018-*).

A la hora de determinar este vínculo causal entre la acción u omisión culposa y el daño producido – lo que podemos entender como causa y efecto – , en la Jurisprudencia¹⁵ se aplica, como criterio general, la denominada teoría de causalidad adecuada (Peña, M. 2019, p. 22).

Como indica la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, número 701/2010 de 4 noviembre -RJ 2051/2006-, la teoría de la causalidad adecuada “exige, para apreciar la culpa del agente, que el resultado sea consecuencia natural, adecuada y

¹³ A pesar de que, como indica en su Preámbulo, la Ley 35/2015 reforma el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (en adelante, Real Decreto 8/2004), no ha variado la redacción de los dos primeros párrafos de este artículo 1.1 que actualiza.

¹⁴ Que, como afirma (Larrosa, M.A., 2019, p. 20), “en el ámbito del derecho de la circulación, no cabe duda que la relación de causalidad se configura como uno de los elementos más problemáticos y discutibles del proceso”.

¹⁵ (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 712/1996, de 16 de septiembre -RJ 4029/1992-; Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de Octubre de 1.990 -RJ 1990/8053-).

suficiente de la determinación de la voluntad, debiendo entenderse como consecuencia natural la propicia entre el conocimiento normalmente aceptado”(F.D.7º).¹⁶

En este sentido, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 905/2011, de 30 de noviembre -RJ 737/2018- (F.D.6º):

Para imputar a una persona un resultado dañoso (esto es, para determinar si una determinada acción u omisión imprudente es susceptible de haberlo causado) no basta con la constancia de la relación causal material o física, sino que además se precisa la imputación objetiva del resultado o atribución del resultado, lo que en la determinación del nexo de causalidad se conoce como causalidad material y jurídica.

Por lo tanto, podemos decir que no puede considerarse de forma aislada la sucesión causal, ya que esta será indiferente si no es imputable a un sujeto. Igualmente, la imputación objetiva respecto del resultado, requiere que se constate la “relación causal material o física y que a su vez, se produzca una causalidad material y jurídica” (nexo de causalidad)¹⁷, de no ser así, nos encontraríamos ante una causa exoneradora de responsabilidad. En la misma línea, se pronuncia la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Alicante, en su sentencia núm. 534/2018, de 26 de noviembre -RJ 478/2018- y núm. 146/2016, de 1 de abril -RJ 622/2015-.

¹⁶ Igualmente, la Jurisprudencia menor se ha hecho eco de lo expuesto en la Sentencia referenciada. Así, por ejemplo, citamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Novena, núm. 146/2016, de 1 de abril -RJ 622/2015 (F.1º).

¹⁷ Tal y como recoge la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 905/2011, de 30 de noviembre -RJ 737/2018- (que cita la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 303/2006, de 29 de marzo -RJ 3816/1999- y núm. 725/2010, de 25 de noviembre de 2010 -RJ 2011/583-).

4. El artículo 135 de la Ley 35/2015, los “criterios de causalidad genérica”.

Aunque ya eran aplicados por la Jurisprudencia a la hora de valorar la existencia del nexo causal (véase la *Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Cuarta, núm. 335/2017, de 13 de octubre -RJ 337/2017-*; la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, número 84/2018, de 16 de febrero -RJ. 568/2016-*; la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Novena, núm. 357/2015, de 6 de octubre -RJ 321/2015-*; y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Séptima, número 475/2016, de 1 de diciembre -RJ 593/2016-*), la Ley 35/2015 introduce en la redacción de su artículo 135.1 los denominados “criterios de causalidad genérica en los traumatismos cervicales menores”¹⁸, los cuales deberán concurrir de forma cumulativa¹⁹. El mencionado precepto es el siguiente (artículo 135.1, Ley 35/2015):

1. Los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor, y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias, se indemnizan como lesiones temporales, siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes:
 1. De exclusión, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología.
 2. Cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable. En particular, tiene especial relevancia a efectos de este criterio que se hayan manifestado los síntomas dentro de las setenta y

¹⁸ En atención a lo recogido en el apartado tercero del mismo precepto, a su vez, deberán ser aplicados a los “traumatismos menores de la columna vertebral”, a los cuales se hace referencia en el “baremo médico de secuelas” – concretamente, en la Tabla 2.A.1, capítulo III, B), apartado 1, que se titula: “Traumatismos menores de la columna vertebral”) - contenido en la misma Ley 35/2015. (artículo 135.3, Ley 35/2015).

¹⁹ (De las Heras, M., 2018, p.32)

dos horas posteriores al accidente o que el lesionado haya sido objeto de atención médica en este plazo.

3. Topográfico, que consiste en que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario.
4. De intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia.

Como es sabido, se trata de uno de los preceptos contenidos en la Ley 35/2015 que ha generado – y continúa generando – más polémicas. Esto se debe, en primer lugar, a que, tal y como indica Represas, C. (2017), “los traumatismos menores de columna en las colisiones a baja velocidad” se encuentran dentro de las situaciones que en la práctica generan más dificultades en el estudio del nexo causal.

A su vez, por un lado, nos encontramos con lo que se ha denominado el “latigazo cervical”²⁰, el “cuponazo cervical” o “síndrome de fortuna”²¹, conceptos a través de los cuales se ha nombrado al posible fraude existente a la hora de reclamar los lesionados por este tipo de lesiones provocadas en un accidente de tráfico. Según Velasco, J.C. (2016) y Astray, M.P. (2019), con dicho precepto se pone “coto” a estos casos en los que las secuelas postraumáticas tienen como fundamento la manifestación del perjudicado sobre la existencia de dolor y no pueden verificarse o evidenciarse a través de pruebas médicas. Por otro lado, nos encontramos también con que las compañías aseguradoras tienden en la gran mayoría de los casos a valorar que se trata de daños menores y que, en la mayor parte de los supuestos,

²⁰ (Velasco, J.C., 2016).

²¹ (De las Heras, M., 2018).

no dejan secuelas. Esto deriva en una negación prácticamente sistemática de las indemnizaciones que se reclaman.

Como trataremos más adelante – y puede desprenderse de la lectura del propio artículo – con la inclusión de este precepto el legislador exige un mayor rigor tanto de la evaluación de las posibles causas que generan este tipo de traumatismos, como de las consecuencias médicas que estos presentan²².

Antes de continuar con el estudio del artículo 135 de la Ley 35/2015 y su aplicación, es conveniente tratar varios conceptos a los que se hace referencia en él.

4.1. Los traumatismos menores de la columna vertebral.

La definición de traumatismo menor la da el propio precepto 135.1 de la Ley 35/2015 cuando se refiere a los mismos indicando “que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor, y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias²³”.

Respecto de la indemnización derivada como consecuencia de este tipo de traumatismos, el apartado primero sólo se refiere a los “traumatismos cervicales menores”²⁴ y establece que, acreditados los criterios de causalidad, serán indemnizados como lesiones temporales. En este sentido, debemos destacar el apartado segundo²⁵ del artículo 135 de la Ley 35/2015, en el que se recoge: “La secuela que derive de un traumatismo cervical menor

²² Según Represas, C. (2017), “la entrada en vigor de la Ley 35/2015 hace recobrar protagonismo a la causalidad médica”.

²³ Siguiendo a Gallardo, N. (2016), como ejemplos de pruebas complementarias encontramos: exploraciones radiológicas, ecografías, resonancias magnéticas, electromiografías, termografías o TAC (tomografía axial computarizada). El perito médico de seguros considera que este tipo de pruebas que hemos mencionado no son útiles en los traumatismos menores de la columna vertebral.

²⁴ (Artículo 135.1, Ley 35/2015)

²⁵ Indica el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial en su Dictamen FSCSV 3/2016 sobre la Ley 35/2015, que debemos entender que: “el alcance del art 135.2 es estrictamente probatorio”.

se indemniza sólo si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el período de lesión temporal” (artículo 135.2, Ley 35/2015)²⁶.

Es preciso tener en cuenta que los traumatismos cervicales menores se caracterizan por no poder comprobarse o diagnosticarse mediante métodos de diagnóstico objetivo, basándose únicamente en las manifestaciones del dolor que sufre el propio lesionado. Aunque en nuestra opinión, el dolor efectivamente no es constatable por pruebas de diagnóstico, pero si las consecuencias previas o posteriores al dolor, como por ejemplo, la existencia de contracturas musculares (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Quinta, núm. 86/2020, de 14 de febrero -RJ 232/2019-*).

Como consecuencia de que no cabe un diagnóstico objetivo, no se pueden acreditar tampoco las secuelas que se puedan mantener tras haber superado el periodo normal de curación. Lo novedoso de este artículo es que las consecuencias de esos traumatismos leves se van a constreñir a la indemnización de las lesiones temporales, excluyendo posibles secuelas²⁷.

4.1.1. Las lesiones temporales.

Para conocer la definición de lesiones temporales debemos acudir al artículo 134.1 de la Ley 35/2015, que establece: “Son lesiones temporales las que sufre el lesionado desde el momento del accidente hasta el final de su proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela” (*véase el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia*

²⁶ Como en su momento destacó la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sala de lo Civil, Sección Cuarta, núm. 373/2016, de 23 de noviembre -RJ 320/2016-, en la tramitación del Proyecto de Ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, fue eliminado el término “excepcionalmente” de la redacción del precepto que nos ocupa.

²⁷ Por ejemplo, ocurre esto en los dos supuestos prácticos que hemos planteado al final del presente Trabajo en los que, según los informes emitidos por el médico especialista en valoración del daño corporal (Anexo II y Anexo III), al tratarse de síntomas no objetivables, se valoran como lesiones temporales excluyéndose la existencia de secuelas.

de la Audiencia Provincial de Zamora, Sección Primera, núm. 142/2020, de 17 de abril -RJ 456/2019-).

Por lo que respecta a la indemnización por lesiones temporales, la misma se cuantifica conforme a las disposiciones y reglas que se establecen en la Sección 3ª del Capítulo II de la Ley 35/2015²⁸ y que se reflejan en los distintos apartados de la “Tabla 3” que figura como Anexo de la misma Ley. Esta “Tabla 3” a la que se hace referencia, contiene los siguientes apartados (artículo 134.3, Ley 35/2015):

- Tabla 3.A, en ella se establece la cuantía correspondiente al perjuicio personal básico conforme a los criterios y reglas establecidos por el sistema.
- Tabla 3.B, la cual establece la cuantía correspondiente a los perjuicios personales particulares conforme a los criterios y reglas establecidos por el sistema.
- Tabla 3.C, que establece la cuantía correspondiente a los perjuicios patrimoniales, realizando una distinción entre las categorías del daño emergente y del lucro cesante.

4.1.1.1. Perjuicio personal básico.

Se entiende por perjuicio personal básico aquel perjuicio común que el lesionado ha padecido desde la fecha en que tuvo el accidente hasta, bien, la fecha en la que ha finalizado el proceso curativo, o bien, la fecha en la que se haya estabilizado la lesión y como consecuencia se convierta en secuela²⁹ (artículo 136, Ley 35/2015).

²⁸ En concreto, se refiere a los artículos 134 a 143 de la Ley 35/2015.

²⁹ La definición de “secuela”, así como la regulación relativa a su indemnización, viene dada en la Sección 2ª de la Ley 35/2015. Concretamente, en su artículo 93 se recoge: “Son secuelas las deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales y los perjuicios estéticos que derivan de una lesión y permanecen una vez finalizado el proceso de curación. El material de osteosíntesis que permanece al término de este proceso tiene la consideración de secuela” (artículo 93, Ley 35/2015)

Como hemos mencionado, la valoración económica del perjuicio personal básico se debe determinar conforme a la cantidad diaria que se establece en la Tabla 3.A que figura como Anexo en la Ley 35/2015³⁰. Si bien, a la hora de realizar tanto esta valoración económica, como la de los restantes perjuicios, es necesario conocer las distintas actualizaciones en esta materia. Así, para la elaboración del presente trabajo, se ha consultado la Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (en adelante, Resolución 4371/2020).

De acuerdo con la Tabla 3.A de dicha Resolución, la indemnización por día de perjuicio personal básico asciende a un total de 31,31 €/día.

4.1.1.2. Perjuicio personal particular.

Una vez determinado el perjuicio personal básico, debemos atender al perjuicio personal particular, que viene regulado en la Subsección 2ª, denominada “Perjuicio personal particular” de la Ley 35/2015 y que contiene los artículos 137 a 140. Con este primer concepto se pretende individualizar el perjuicio sufrido por el lesionado, ya que se va a modular en función de sus circunstancias concretas. Así, en los artículos mencionados se regulan distintos perjuicios para las lesiones temporales, estos son los siguientes:

- Perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida: con tal concepto se pretende indemnizar el “perjuicio moral particular” que ha sufrido la víctima como consecuencia de la limitación o impedimento en su desarrollo personal o autonomía, ya sea por las lesiones que ha padecido, o por el tratamiento de las mismas (artículo

³⁰ (artículo 136.2, Ley 35/2015).

137 de la Ley 35/2015). La valoración económica del perjuicio personal particular se debe determinar conforme a la cantidad diaria que se establece en la Tabla 3.B que figura como Anexo en la Ley 35/2015³¹, si bien, se deberá atender en cada caso a los distintos grados³² que se recogen en el artículo 138 de la misma. En virtud de este último precepto, el perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida puede estar modulado desde el grado moderado, a grave o muy grave³³.

Con arreglo a la Tabla 3.B de la Resolución 4371/2020, la indemnización por día de pérdida de calidad de vida asciende a un total de 104,42 €/día para el perjuicio muy grave; 78,31 €/día para el perjuicio grave; y 54,30 €/día para el perjuicio moderado.

- Perjuicio personal particular causado por intervenciones quirúrgicas: aunque este perjuicio también viene reconocido en el artículo 140 de la Ley 35/2015, dado que el presente trabajo se centra en la aplicación del artículo 135 y que dentro de los traumatismos menores de la columna vertebral no procede su aplicación, no vamos a profundizar en este tipo de perjuicio, simplemente lo mencionamos para reconocer su regulación.

4.1.1.3. Perjuicios patrimoniales.

Las lesiones sufridas en accidentes de tráfico no sólo suponen un daño en la esfera personal o sanitaria del perjudicado, afectan también a sus aspectos anímicos, afectivos,

³¹ (artículo 139.1, Ley 35/2015).

³² Como indica el artículo 139.2 de la Ley 35/2015, las cuantías que se establecen para cada grado incluye el importe que en su caso corresponde al perjuicio personal básico. Igualmente, resaltamos que, conforme al artículo 138.5 de la Ley 35/2015, si una persona o lesionado, por circunstancias físicas o psíquicas derivadas de las lesiones sufridas, no puede realizar su trabajo o actividad profesional, esa limitación a su actividad está incluida dentro de los tres grados que se establecen.

³³ Estos grados se aplicarán de forma sucesiva, teniendo en cuenta que la aplicación de uno excluye a la de otro y que sólo se podrá asignar un grado por cada día de perjuicio (artículo 138.6, Ley 35/2015).

laborales y patrimoniales. Así, una persona que sufra un accidente de tráfico y que, como consecuencia de este sufra una pérdida de ingresos o deba hacer frente a unos gastos a lo largo del proceso curativo, podrá ser indemnizada conforme a la Subsección 3ª, denominada “Perjuicio patrimonial” de la Ley 35/2015 y que contiene los artículos 141 a 143.

Si bien, al igual que sucede con el “perjuicio personal particular causado por intervenciones quirúrgicas” que acabamos de mencionar, en los supuestos que regula el artículo 135 de la Ley 35/2015 el perjudicado no suele sufrir un perjuicio personal patrimonial, por lo que no se va a tratar de forma detallada este tipo de perjuicios.

4.2. El informe médico concluyente.

Debemos recordar que por la aplicación del, ya citado, artículo 135.2 de la Ley 35/2015, aquellas secuelas que deriven de un traumatismo cervical menor sólo serán indemnizadas cuando un informe médico concluyente acredite su existencia tras el periodo de lesión temporal³⁴. Igualmente, debemos tener en cuenta que para determinar y medir las lesiones temporales que acabamos de tratar, es necesario que, como se recoge en el artículo 37³⁵ de la misma Ley, se realice un “informe médico ajustado a las reglas de este sistema” (artículo 37, Ley 35/2015).

A pesar de que la Ley 35/2015 haga referencia a esta necesidad del informe médico concluyente para determinar la existencia de secuelas en estos casos, en su redacción no se da una definición de en qué consiste el mismo. Igualmente, tampoco existe un criterio

³⁴ (artículo 135.2, Ley 35/2015).

³⁵ En aplicación de dicho precepto, del artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (en adelante, Ley de Contrato de Seguro), y del principio de buena fe, el lesionado habrá de permitir su reconocimiento por los servicios médicos de la aseguradora a la que reclama. En caso de que el lesionado no facilite y permita ese reconocimiento y que como consecuencia de ello la aseguradora no pueda emitir la oferta motivada, la misma podría quedar liberada de pagar los intereses moratorios y penalizadores fijados en el artículo 20 de la LCS.

jurisprudencial que lo defina, no obstante, es ilustrativa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sección Segunda, número 165/2020 de 15 de mayo -RJ 148/2020- que recoge lo siguiente:

Partiendo de la dificultad de interpretación que plantea dicho concepto podemos entender como informe concluyente aquel que al finalizar el periodo de lesiones temporales, refleja la existencia de deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales y perjuicios estéticos, que permanecen una vez concluido dicho periodo de curación (artículo 93.1 de la Ley 35/2015). (F.D.2º).

Por ejemplo, nos encontramos con supuestos en los que las Audiencias Provinciales consideran que, atendiendo a que el artículo 135.2 de la Ley 35/2015 hace referencia al “informe médico concluyente tras el periodo de incapacidad temporal”³⁶, el informe médico que mejor acredita las secuelas una vez que ha finalizado este periodo, es el informe del especialista que ha llevado a cabo el seguimiento del lesionado³⁷.

Para profundizar en este concepto, atendemos a las palabras del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial recogidas en su Dictamen FSCSV 3/2016, donde, en relación al informe médico concluyente, aclara que su expresión “no significa que la secuela exija una prueba reforzada o de mayor valor, pues iría en contra de los principios y normas de la LEC y LECr. Debe entenderse concluyente como que concluya, que emita una opinión o dictamen motivado” (p. 82).

³⁶ (artículo 135.2, Ley 35/2015).

³⁷ (véase, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Cuarta, núm. 397/2018, de 18 de junio -RJ 860/2017-; Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, núm. 251/2017, de 3 de noviembre -RJ 273/2017-; Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, núm. 279/2017, de 24 de noviembre -RJ 368/2017-; y Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, núm. 166/2018, de 19 de marzo -RJ 726/2017-)

Cuando Gallardo, N. (2016) trata el informe médico concluyente, refiere que éste debe consistir en un informe pericial³⁸ que, si bien, deberá ser adaptado a lo dispuesto en la Ley 35/2015, en concreto, a las normas para valoración del daño corporal contenidas en el Título IV, Capítulo II: “Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”³⁹. Por lo tanto, podemos acudir a lo dispuesto en el artículo 11.2 del Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor (en adelante, Real Decreto 1148/2015), donde se establece el contenido mínimo que debe incluir el informe pericial. Si bien, antes de citar este contenido mínimo, aclaramos que, para aplicarlo correctamente al tema que nos ocupa, hemos completado lo dispuesto en el citado artículo 11.2 del Real Decreto 1148/2015 con las indicaciones dadas por Gallardo, N. (2016) en lo relativo al contenido del informe médico concluyente. Por ende, podemos resumir este contenido mínimo en lo siguiente:

- La identificación, tanto del lesionado, como de la entidad aseguradora y del profesional que lo emite.
- Objeto del informe.
- Información relevante del accidente, incluyendo su mecanismo de producción.

³⁸ En este sentido, referenciamos lo dispuesto por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia en su Sentencia núm. 389/2020, de 3 de julio -RJ 409/2019- que, respecto al informe pericial, aclara que: “tiene por objeto ilustrar al Juzgador acerca de determinadas materias que, por la especificidad de las mismas, requieren unos conocimientos especializados de los técnicos en tales ámbitos del conocimiento y de los que, como norma general, carece el órgano jurisdiccional. Así resulta del contenido del artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil” (F.D.2º).

³⁹ (Ley 35/2015)

- Información médica del lesionado en el que se basa el informe⁴⁰, debiendo indicarse la fuente y documentación de la que se ha dispuesto, las pruebas realizadas y las fechas y ocasiones en las que se hubiera inspeccionado al lesionado.
- Valoración del daño corporal de acuerdo con la solicitud realizada, habrá que determinar y medir las secuelas y lesiones temporales con todos sus perjuicios indemnizables que requieran valoración médica.
- Estudio del nexo causal⁴¹.
- Conclusiones.

Igualmente, el artículo 11.3 del Real Decreto 1148/2015 remite a un modelo de informe que se deberá utilizar y en él se incluyen contenidos más específicos.

Podría entenderse que la norma del artículo 135 de la Ley 35/2015, en lo relativo al informe concluyente, es una norma de mínimos aplicable en aquellos casos en que, por no poderse basar el diagnóstico más que en las manifestaciones del propio lesionado, es necesario acudir a criterios orientativos de diagnóstico.

5. Análisis de los “criterios de causalidad genérica”.

Además de los cuatro criterios que se incluyen en la redacción del artículo 135 de la Ley 35/2015 y que vamos a tratar a continuación, en la práctica del estudio del nexo de causalidad nos encontramos con una gran variedad de criterios medico-legales que se aplican con carácter general aunque no hayan sido recogidos legalmente. Coinciden (Represas, C.,

⁴⁰ Dentro de esta información médica del lesionado, Gallardo N. (2016) incluye: la primera asistencia, el diagnóstico inicial, el tratamiento inicial, la evolución, la exploración clínica y el estado final.

⁴¹ El estudio del nexo causal no se encuentra dentro del contenido mínimo del artículo 11.2 del Real Decreto 1148/2015, no obstante, se incluye en el Anexo II de este Real Decreto y Gallardo, N. (2016) si especifica que deberán valorarse los criterios de causalidad.

2017, p.63) e (Hinojal, R., 1996, p.37) al recordar los más repetidos y que continúan vigentes en la actualidad, son aquellos que propusieron Müller y Cordonnier en 1925, que fueron matizados por Simonin en 1966⁴², posteriormente reinterpretados por diversos autores y completados con los criterios de causalidad de Bradford Hill.

A efectos legales y en materia de tráfico⁴³, estos criterios – que antes de la Ley 35/2015, ya se venían aplicando - cobran relevancia en aquellos procedimientos en los que su objeto de discusión se fundamenta en la existencia del nexo de causalidad entre el accidente y las lesiones sufridas⁴⁴. En estos casos en los que es necesario valorar la realidad de la lesión, se atiende a la causalidad desde un punto de vista médico, pues como indica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Novena, núm. 357/2015, de 6 de octubre -RJ 321/2015-: “será por el examen de los informes médicos aportados a las actuaciones dónde se podrá valorar la realidad de la discutida relación” (F.2º). La referida Sentencia trata y define los criterios de imputación medico-legales que acabamos de mencionar, motivo por el que - de cara a su correcta comprensión y aplicación desde un punto de vista legal -, emplearemos las definiciones dadas por la Audiencia Provincial. Dichos criterios son los siguientes:

- Criterio de verosimilitud de diagnóstico etiológico o naturaleza del trauma: “por el que se analiza científicamente la fisiopatología de las lesiones, y si existen otros factores casuales que hayan intervenido en la evolución del proceso”.

⁴² Para la elaboración de este resumen de los criterios, también ha sido de utilidad la “Tabla II. Comparativa de los criterios de Müller y Cordonnier y los de Simonin” (Ortiz, V., 2017, p.16).

⁴³ Como ya comentamos al tratar la inclusión de los criterios de causalidad genérica en el artículo 135 de la Ley 35/2015, la doctrina y jurisprudencia ha venido empleando tanto estos criterios, como otros.

⁴⁴ Por ejemplo, la propia Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, en su Sentencia núm. 213/2014, de 11 de septiembre -RJ 353/2014-, en su Fundamento de Derecho Segundo, define y aplica los criterios que en su día determinó Simonin, en base a los cuales estima las pretensiones del perjudicado.

- Criterio de continuidad sintomática o de ligazón anátomo-clínica (naturaleza de la lesión): “a través del cual se revela la coherencia evolutiva de los síntomas, desde sus primeras manifestaciones, hasta la aparición de secuelas, o la curación”.
- Criterio topográfico: “o de concordancia topográfica entre el lugar de la lesión, y donde se produjo el hecho lesivo, mediante la concordancia de localización entre la zona afectada por el traumatismo y la aparición de las lesiones”.
- Criterio cuantitativo o de la naturaleza de la afección (relación sintomática): “a través del cual se pretende establecer la relación entre la intensidad del hecho lesivo, y las lesiones, aspecto en el que se valorarán sí las variables mecánicas del accidente (tipo de colisión) y la biomecánica lesional son adecuadas a las consecuencias lesivas discutidas”.
- Criterio cronológico o de condición del tiempo (relación cronológica): “que toma en consideración el tiempo transcurrido entre el hecho lesivo, y los primeros síntomas”.
- Criterio de intensidad previa, integridad anterior o ausencia del estado anterior (la afección no existía antes del trauma): “que se cumple si no existe un estado anterior patológico con influencia en la evolución de las lesiones”.
- Criterio etiológico o realidad del traumatismo y naturaleza del mismo: “que nos indica si el hecho lesivo puede ser causa de las lesiones, en atención a la realidad y naturaleza del traumatismo”.

Como vemos, dentro de estos criterios podemos identificar los de “causalidad genérica” del artículo 135 de la Ley 35/2015, ya sea por su nombre, o por su posible aplicación. Si bien, esta identificación adquirirá relevancia al tratar cada uno de ellos.

5.1. Criterio de exclusión.

Este criterio viene definido por la norma como aquél que “consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología” (artículo 135.1.a, Ley 35/2015). Para entender correctamente la aplicación del criterio de exclusión, son de gran ayuda las palabras de Represas, C. (2017), razona que dicho criterio “explicará los antecedentes relevantes que puedan solaparse con los síntomas observados tras el accidente, tratando de diferenciar cuales de ellos son previos y cuales, previsiblemente, pueden corresponder al accidente” (p. 69).

En base a este criterio, se exonera de responsabilidad al conductor del vehículo si se acredita alguna circunstancia previa que rompa el nexo causal entre las lesiones que se reclaman y el accidente sufrido. Esta circunstancia - puede entenderse como una patología previa - que rompe el nexo causal, tiene que tener entidad suficiente e incidir de forma relevante en las lesiones sufridas, de forma que de no haber ocurrido ese hecho que rompe el nexo causal, esas lesiones no se hubieran producido. Por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Quinta, núm. 323/2017, de 5 diciembre -RJ 348/2017- vemos como se cuestiona el criterio de exclusión debido a que el perjudicado sufrió un accidente anterior al que es objeto de reclamación en dicho procedimiento, ese accidente previo le ocasionó unas lesiones (esguince cervical severo) y como consecuencia de las mismas sufre a menudo molestias en el cuello compatibles con las que son objeto de reclamación (F.D.2º). Lo mismo sucede en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, núm. 325/2020, de 30 de junio -RJ 854/2018- y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, núm. 180/2018, de 10 de mayo -RJ 149/2018-, en esta última, se desestima la existencia del nexo de causalidad entre las lesiones por las que se reclama y el siniestro producido en atención a que, en los informes médicos

que aporta el perjudicado, se hace referencia a unas lesiones de tres meses de evolución que coinciden con la fecha en la que el demandante sufrió otro accidente de tráfico (F.D.5º).

En cambio, también podemos encontrarnos supuestos en los que, a pesar de que el perjudicado haya sufrido un accidente con anterioridad al que es objeto de reclamación, se entiende que queda acreditado el criterio de intensidad por no constar antecedentes médicos que acrediten el padecimiento de dolores previos compatibles con la lesión posterior. Así lo razona la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, núm. 28/2019, de 28 de enero -RJ 428/2019-, que tras estudiar la concurrencia de cada uno de los cuatro criterios de causalidad genérica en su Fundamento Cuarto, estima la procedencia de la indemnización.

Debemos tener en cuenta que el hecho de haber sufrido una lesión no excluye que en un accidente posterior pueda volver a sufrirse esa misma lesión o una agravación de unas secuelas o lesiones anteriores. Así, por ejemplo, puede darse la existencia de una lesión degenerativa preexistente al accidente y que éste incida en su agravación (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, núm. 17/2016, de 19 de enero -RJ 16/2015-*). Precisamente, en el sistema de valoración de la Ley 35/2015 encontramos partidas resarcitorias aplicables a las agravación de un estado preexistente (De las Heras, M., 2018, p.32).

5.2. Criterio cronológico.

Se entiende como aquél que “consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable. En particular, tiene especial relevancia a efectos de este criterio que se hayan manifestado los síntomas dentro de las setenta y dos horas posteriores al accidente o que el lesionado haya sido objeto de atención médica en este plazo” (artículo 135.1.b, Ley

35/2015). Según Represas, C. (2017), el criterio cronológico “analizará la cronopatología de los síntomas, su aparición, tipología y la asistencia sanitaria” (p.69).

No existen dudas a la hora de entender acreditado este criterio cuando el perjudicado demuestra que ha recibido asistencia médica dentro de este margen de 72 horas del artículo 135.1.b de la Ley 35/2015 y en sus correspondientes informes se aprecian las lesiones por las que se reclama. Así, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección Segunda, núm. 118/2020, de 12 de mayo, -RJ 373/2019- (F.D.2º), se estima la concurrencia del criterio cronológico por cuanto el lesionado acude al servicio de asistencia sanitaria el mismo día en el que sucede el accidente, apreciándose una inmediatez de diagnóstico. Lo mismo sucede en la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Cuarta, núm. 72/2017, de 2 de marzo -RJ 524/2016-, en la que el criterio se entiende acreditado puesto que el perjudicado acude a los servicios de urgencias al día siguiente del siniestro acaecido.

No obstante, es importante atender a las circunstancias concretas de cada supuesto, ya que podemos encontrarnos con diferentes interpretaciones. A modo de ejemplo, referenciamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera, núm. 285/2017, de 26 septiembre -RJ 136/2017-⁴⁵ y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección Tercera, núm. 249/2016, de 20 octubre -RJ 3313/2016-⁴⁶, ambas coinciden al determinar que la aparición de los síntomas una vez que han transcurrido las 72 horas a las que se refiere el citado precepto, no debe suponer la exclusión automática del nexo de causalidad entre el siniestro y las lesiones y secuelas que se reclaman. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, núm. 33/2020, de 3 de febrero -RJ

⁴⁵ Supuesto en el que la primera asistencia médica tras el accidente se presta con un retraso de 15 días desde que se produjo el siniestro.

⁴⁶ En este caso, el perjudicado no puede acudir inmediatamente al médico por razones de trabajo, una vez que acude a su médico de cabecera, obtiene cita para una fecha en la que han transcurrido 10 días desde que tuvo lugar el accidente.

46/2019- entiende que en estos casos, “la apreciación del criterio cronológico precisa de un examen detallado de la prueba médica aportada a los autos para dilucidar si es posible conectar causalmente las lesiones reclamadas con el siniestro de autos” (F.D.2º).

Si bien, destacamos que esto sucede cuando concurren todos los demás criterios de causalidad genérica y se pone en duda la procedencia de la correspondiente indemnización debido únicamente a una asistencia médica fuera de este plazo que la ley “marca como indicio favorable para apreciar la concurrencia del expresado criterio cronológico”⁴⁷. En caso de que no sólo sea el criterio cronológico el que genere dudas, sino que esto suceda con cualquier otro de los criterios que se recogen en el precepto que nos ocupa, se podrá determinar la falta de acreditación de nexo de causalidad. Esto sucede, por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, núm. 116/2017, de 28 de febrero -RJ 508/2016-, en la que se entiende que no queda probado el nexo causal puesto que no concurren ni el criterio topográfico (respecto a la región en la que aparecen las lesiones, una discopatía que no guarda relación con el siniestro), ni el criterio cronológico (el primer informe médico que aporta el demandante es de fecha posterior a un mes desde que ocurrió el accidente). Igualmente, la Audiencia entiende que no existe una continuidad debido a que no se ha realizado un seguimiento y tratamiento médico⁴⁸. Estas apreciaciones determinaron que se desestimaran las pretensiones del demandante.

Se puede dar el caso de que sea el propio lesionado el que, con su actuación - al no seguir el tratamiento médico - influya tanto en el periodo de curación, como en las secuelas que le resulten. En estos casos, no se puede considerar que se haya roto el nexo causal entre el accidente y las lesiones sufridas, pero sí que haya habido una causa que incida en el nexo

⁴⁷ (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, núm. 33/2020, de 3 de febrero -RJ 46/2019-).

⁴⁸ Vemos como en este supuesto, igualmente se aplica uno de los criterios medico-legales a los que hemos hecho referencia anteriormente.

de causalidad respecto del periodo de curación de las lesiones entendiendo que se ha prolongado por actos u omisiones del propio lesionado. Entonces, sucede un supuesto similar al que se contempla en la Sentencia de la Audiencia provincial de A Coruña, Sección Quinta, núm. 292/2017, de 2 de noviembre -RJ 5/2017-, en la que se discute sobre un periodo de 3 meses en el que se produce una laguna asistencial en el tratamiento de las lesiones. Tras valorar los distintos informes periciales que se aportan como medios de prueba, se reduce la cuantía correspondiente a la indemnización adaptándola al periodo normal de curación de ese tipo de lesiones. Por lo tanto, nos encontramos ante otra posible interpretación del criterio cronológico.

5.3. Criterio topográfico.

Este criterio viene definido por la norma como aquél que “consiste en que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario” (artículo 135.1.c, Ley 35/2015). En relación al criterio topográfico, Represas, C. (2017) indica que “por norma general no será un criterio excluyente” debido a que es conocido que los traumatismos menores de columna “suelen producirse por mecanismos indirectos”(p.69)⁴⁹. En sentido parecido, se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Quinta, núm. 384/2017, de 10 de noviembre -RJ 431/2017- (F.D.2º), en la que se razona que no es preciso dudar de la concurrencia de este requisito, ni debe discutirse, puesto que el procedimiento versa sobre las lesiones derivadas de una colisión frontolateral y la parte afectada del cuerpo es la columna vertebral.

⁴⁹ De la misma forma lo interpreta (De las Heras, 2018, p.34), quien, en relación con los demás criterios de causalidad genérica, entiende el topográfico como el menos problemático.

Por lo tanto, nos encontramos ante un criterio que, en la mayor parte de los casos, no va a presentar dudas sobre su concurrencia, salvo en aquellos supuestos en los que se discuta la reclamación de unas lesiones que no guardan relación con la zona corporal que puede verse afectada por el siniestro que supuestamente las ha ocasionado. Esto sucede en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimonovena, núm. 123/2020 de 4 junio -RJ 444/2018-, en su Fundamento de Derecho Cuarto, se discute la existencia del nexo causal entre las lesiones por las que se reclama (una lesión de hombro) y una colisión frontal (que normalmente, lo que provoca es el llamado “síndrome del latigazo cervical”). También ocurre en el procedimiento seguido ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, en el que la localización corporal de las lesiones no era compatible con la colisión, en base al criterio topográfico, en su Sentencia núm. 237/2017, de 12 de septiembre de 2017 -RJ 635/2016-, la Audiencia desestimó las pretensiones del demandante.

5.4. Criterio de intensidad.

Viene definido como el criterio que “consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia” (artículo 135.1.d, Ley 35/2015). Según Represas, C. (2017), “relacionará los parámetros físicos del accidente con los umbrales poblacionales de lesión, recomendando establecer un grado de probabilidad, además de explicar el mecanismo de producción de la lesión” (p.70).

Debemos partir de la aplicación judicial que se hace de este criterio, es ilustrativa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, núm. 84/2018, de 16 de febrero, -RJ 568/2016-, que cita la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Segunda, núm. 341/2016, de 20 de diciembre -RJ 236/2016- (F.D.4º), y que dice textualmente:

Recordemos que a través del criterio cuantitativo o de proporcionalidad⁵⁰, se pretende establecer la relación entre la intensidad del hecho lesivo y las lesiones, y a tal efecto se valorara si las variables mecánicas del accidente en relación con la biomecánica lesional son adecuadas a las consecuencias lesivas discutidas. Al efecto existen dos posturas básicas, bien objetivar y aplicar a la generalidad de los casos los umbrales del dolor o umbrales patogénicos, bien estimar que las colisiones a baja velocidad también pueden serlo en función de las concretas circunstancias concurrentes (F.D.2º).

La mayor parte de los autores, entre ellos (Rivas, M^a. J., 2019, p.9) y (De las Heras, M., 2018, p. 34) coinciden al razonar que, en casi todos los procedimientos que estamos analizando, la discusión versa sobre la intensidad de los siniestros. Esto se debe a que en la mayoría de los casos se argumenta que las lesiones que son objeto de reclamación no pueden ser consecuencia del accidente debido a su baja intensidad. Dicha argumentación tiene como base la aportación del denominado Informe de biomecánica que trataremos más adelante.

A la hora de valorar la existencia de la relación de causalidad, en muchos procedimientos se ha razonado que no cabe la exclusión automática del nexo de causal entre el siniestro y las lesiones y secuelas que se reclaman únicamente en base a que no se haya acreditado el criterio de intensidad⁵¹. Por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, núm. 575/2019, de 26 diciembre -RJ 198/2019-, a pesar de la imposibilidad de determinar el criterio de intensidad, se condena a la demandada a

⁵⁰ Como ya indicamos anteriormente, los criterios medico-legales ya venían aplicándose en la jurisprudencia antes de la entrada en vigor de la Ley 35/2015. Esta Sentencia constituye un ejemplo de esa aplicación, pues en ella se trata el criterio cuantitativo o de proporcionalidad. Si acudimos a la definición que en su momento aportamos de dicho criterio (página 27 del presente Trabajo) y la comparamos con la del criterio de intensidad que acabamos de recoger, veremos como es posible identificar que el contenido de ambos criterios es prácticamente similar.

⁵¹ Recordamos que esta línea jurisprudencial también se ha aplicado al criterio cronológico.

indemnizar las lesiones sufridas como consecuencia del accidente en base a que si se ha quedado acreditada la concurrencia de los criterios restantes. En igual sentido resuelve la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Asturias, en su Sentencia núm. 179/2017, de 8 de mayo -RJ 161/2017- en la que expresamente se recoge: “la intensidad de la colisión, por sí misma, no puede erigirse en criterio definitorio de la existencia de lesiones” (F.D.2º)⁵².

Dejando al margen esta introducción al criterio de intensidad, dada su condición de criterio que más problemáticas presenta en la práctica, debemos centrarnos en los distintos conceptos que intervienen en él y en su aplicación.

5.4.1. Las colisiones por alcance y las colisiones a baja velocidad.

Los traumatismos menores de columna y los síndromes del latigazo cervical⁵³, en la mayoría de los casos se producen como consecuencia del impacto de un vehículo en movimiento contra otro que se encuentra detenido, o por un alcance de un vehículo a otro que circula a reducida velocidad. En el tipo de accidentes descrito, los ocupantes del vehículo que absorbe el impacto reciben a través del asiento la energía del impacto en el tronco, que es impulsado hacia adelante con el vehículo, mientras que la cabeza se va hacia atrás y se produce una hiperextensión del cuello (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Primera, núm. 202/2017, de 12 de abril -RJ 233/2017-*). Esta elongación o hiperextensión del cuello, así como el incremento de energía seguido de una disminución drástica de la misma que se recibe, pueden provocar desde el síndrome del latigazo cervical y molestias consecuentes, a un esguince cervical o lesiones óseas, cada una de ellas con gran variedad de manifestaciones clínicas (Larrosa, M.A., 2013, p.13) (*véase el Fundamento de*

⁵²Debemos resaltar esta Sentencia por cuanto que en ella se realiza un ilustrativo resumen sobre los pronunciamientos de las Audiencias Provinciales sobre el correcto funcionamiento y aplicación de este criterio.

⁵³ La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Salamanca, tras estudiar diferente bibliografía aplicable a la materia, concluye en su Sentencia núm. 336/2013, de 15 de octubre -RJ 274/2013- (F.D.2º), que “la expresión latigazo cervical no es una lesión, sino que remite a un mecanismo causal”.

Derecho Cuarto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, núm. 17/2019, de 19 de enero -RJ 240/2018-).

En las consecuencias del impacto influyen, como veremos, diversos factores, entre ellos: las características físicas y la fortaleza muscular del lesionado, la posición que en el momento de la colisión mantuviera su cuello y su cabeza, la tensión o relajación muscular previa al momento del accidente, etc. La Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, Sección Primera, número 164/2012, de 4 de septiembre -RJ 121/2012-⁵⁴ recoge los criterios expuestos al decir que:

En cuanto a la relación de causalidad entre la colisión descrita y las lesiones por las que reclaman los perjudicados, debe recordarse que la entidad de las lesiones derivadas de este tipo de accidentes no viene dada por la aparente gravedad de los desperfectos del vehículo o vehículos implicados, sino por la mecánica característica del denominado 'latigazo cervical', que está determinada por la aceleración o desaceleración de la columna vertebral, principalmente de la zona cervical, y en su producción concurren también otros factores como la edad y el sexo de la víctima, condición y características físicas, existencia de patologías previas, situación del cuerpo junto antes del frenazo o colisión. (F.D.3º)

Como se indica en la Sentencia mencionada, que a su vez, coincide con la Jurisprudencia menor al adoptar este criterio (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial*

⁵⁴ Esta Sentencia es relevante debido a que establece un precedente al considerar que se ha acreditado el nexo de causalidad en este tipo de siniestros. Así, se hacen eco de esta Sentencia, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Primera, núm. 134/2018, de 26 de febrero -RJ 138/2018-; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, núm. 84/2018 de 16 de febrero -RJ 568/2016-; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera, núm. 325/2017, de 25 octubre -RJ 173/2017-; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, núm. 562/2017, de 8 septiembre -RJ 252/2017-; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, Sección Primera, núm. 352/2017, de 18 julio -RJ 843/2016-; y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, núm. 127/2019, de 23 de mayo -RJ 746/2018- .

de Cáceres, Sección Primera, núm. 202/2017, de 12 de abril -RJ 233/2017-; y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Catorceava, núm. 317/2020, de 18 de noviembre -RJ 944/2018-), el latigazo cervical no tiene que ir necesariamente aparejado a daños materiales de entidad en los vehículos implicados. Sin embargo, como se reconoce en la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Tercera, núm. 196/2020, de 25 de junio -RJ 11/2020-, es conocido que las aseguradoras, en la mayor parte de este tipo de procedimientos - que versan sobre lesiones causadas como consecuencia de una colisión por alcance a baja velocidad -, fundan su defensa en la negación de la lesión debido a la falta o escasez de daños materiales en los vehículos.

No obstante, podemos encontrar Sentencias que han recogido este razonamiento tan frecuentemente alegado. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección Primera, núm. 304/2019, de 4 julio -RJ 314/2019-, rechaza las pretensiones de la demandante al entender que no se ha acreditado la existencia del nexo de causalidad entre las lesiones y el siniestro producido. Hay que tener en cuenta que la sentencia mencionada contempla un supuesto de colisión por alcance a baja velocidad de dos vehículos que están detenidos por circunstancias del tráfico y la colisión se produce al reanudar la marcha, por lo que la velocidad a la que se colisiona es muy escasa y los daños fueron mínimos. Supuesto parecido es el procedimiento seguido en la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Sexta, que discurre sobre una colisión a velocidad tan mínima, que no es necesario reparar los vehículos que han intervenido en la colisión. En su Sentencia núm. 667/2016, de 26 de diciembre -RJ 184/2016-, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra razona que las lesiones (cervicalgia) no pueden explicarse como consecuencia de un golpe de tan escasa entidad que no llega a justificar esta transmisión de energía - a la que hemos hecho referencia anteriormente – que sea capaz de provocar un movimiento violento en el cuello de los ocupantes y como consecuencia, produzca una lesión cervical.

En principio y como cuestión previa, habría que determinar qué velocidad máxima sería el tope para considerar que un accidente ha ocurrido una colisión a baja velocidad. Siguiendo a (De las Heras, M., 2018, p.34), la investigación científica coincide al entender que se pueden producir lesiones en los ocupantes de un vehículo una vez que se rebasen los 8 km/h en las colisiones por alcance⁵⁵. No obstante, debemos tener en cuenta lo expuesto por (Luna, A., Muñoz, J.I., & Represas, C., 2015), los cuales entienden que la literatura especializada en la biomecánica del impacto “se vuelve muy conflictiva cuando se pretenden extrapolar los resultados al ámbito asegurador y judicial con el fin de rechazar reclamaciones por lesiones cervicales en colisiones a baja velocidad”(p.6).

Efectivamente, examinando la jurisprudencia, vemos cómo no hay unanimidad en los Tribunales a la hora de entender o aplicar un número exacto de km/h a partir del cual se considere que no pueden sufrir lesiones los ocupantes de un vehículo en una colisión a baja velocidad (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, núm. 323/2019, de 22 de noviembre -RJ 438/2019-*). Razonamiento lógico, pues cada Tribunal deberá examinar todas las circunstancias confluientes (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, núm. 17/2019, de 19 de enero -RJ 240/2018-*). Entendemos, que nos encontramos ante una cuestión que claramente, depende del valor probatorio. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Cuarta, núm. 408/2016, de 18 de julio -RJ 384/2014-, examina las pruebas y aspectos que se deben tener en

⁵⁵ Respecto a este criterio, resaltamos que todas las sentencias que se va a citar a continuación, coinciden al reconocer que “igualmente está demostrado la posibilidad de lesiones a menor velocidad (algunos estudios han reducido el límite a los 4 km/h), en atención a las circunstancias personales de la víctima y circunstancias del siniestro”. En concreto este párrafo referenciado lo hemos extraído de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, núm. 223/2016, de 7 de octubre -RJ 334/2016- (F.D.2º). En igual sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Segunda, núm. 8/2020, de 20 enero -RJ 638/2019- que estima la existencia del nexo de causalidad entendiendo que no puede descartarse el criterio de intensidad a pesar de que el incremento de velocidad sufrido por el vehículo colisionado es superior a 4 km/h.

cuenta en estos procedimientos y que habitualmente, son empleados por las aseguradoras. En su Fundamento de Derecho Segundo, expone:

La prueba de estas circunstancias las tendrá que realizar la entidad aseguradora mediante la aportación de una prueba biomecánica, que tendrá la consideración de prueba pericial. Si bien en este tipo de prueba habrá que tener en cuenta para su valoración una serie de aspectos tales como: la masa de los vehículos, tipo de asientos y reposacabezas, posición de los ocupantes en el interior del vehículo, uso del cinturón de seguridad, deformaciones de los vehículos accidentados. Y además hay que tener en cuenta un factor muy importante que es el parámetro DELTA-V, o cambio de velocidad, que consiste en la velocidad que lleva el vehículo después de una colisión menos la velocidad que llevaba antes. (F.D.2º).

Como vemos, este criterio coincide con el de la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, Sección Primera, número 164/2012, de 4 de septiembre -RJ 121/2012- a la que hemos hecho referencia anteriormente. Si bien, en esta última Sentencia, se añade la precisa valoración del parámetro denominado “Delta-V” o “cambio de velocidad”. Se trata de uno de los factores necesarios para reconstruir el siniestro producido, éste determina o predice, desde la perspectiva biomecánica, el potencial lesivo del siniestro para los ocupantes del vehículo o vehículos implicados⁵⁶.

Cuando nos referimos al parámetro Delta-V como “uno de los factores” que se deben valorar, lo hacemos fundamentándonos en las Sentencias ya mencionadas, como hemos visto, en ellas se incluyen estos otros factores a tener en cuenta. Igualmente, nos basamos, entre otras, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Primera, núm.

⁵⁶ (Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Segunda, núm. 15/2017, de 24 de enero de 2017 - RJ 396/2016-).

522/2016, de 10 de noviembre -RJ 583/2016- (F.D.2º); la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, núm. 223/2016, de 7 de octubre -RJ 334/2016- (F.D. 2º); la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, núm. 17/2019, de 19 de enero -RJ 240/2018- (F.D.4º); y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Segunda, núm. 15/2017, de 24 de enero de 2017, -RJ 396/2016- (F.D.2º) por lo ilustrativas que resultan a la hora de entender el Delta-V como un parámetro que no se puede interpretar como definitivo⁵⁷.

Una vez aclarado esto, procedemos a centrarnos en el parámetro Delta-V. Hemos hablado de este parámetro como cambio de velocidad instantánea del vehículo, si bien, desde el punto de vista de la accidentología clínica, lo realmente relevante es la proyección que tiene el Delta-V sobre los ocupantes de los vehículos intervinientes en la colisión⁵⁸. Por lo tanto, se debe referir a la variación de velocidad que se ejerce en el propio ocupante (De las Heras, 2018, p. 34). Indican (Luna, A., Muñoz, J.I., & Represas, C., 2015) que el parámetro Delta-V ha sido utilizado para definir las colisiones por alcance a baja velocidad, para las que diversos autores han determinado un valor Delta-V inferior de 8 a 15 km/h⁵⁹. A su vez, explican que en investigación, se ha considerado como colisión de baja intensidad aquellas cuyo Delta-V presenta un valor inferior a los 16 km/h, siendo de mediana intensidad las que presenten un valor entre los 16 y 24 km/h y de alta intensidad, cuando se superen los 24 km/h

⁵⁷ Dichas Sentencias, a su vez, enumeran con “carácter meramente demostrativo” los demás factores que se han de tener en cuenta junto con el parámetro Delta-V, de las cuales extraemos los siguientes: la “dirección del vector de impacto”, el “tipo de asiento”, la “posición de la cabeza y el cuerpo”, la “envergadura/peso del ocupante”, “los antecedentes médicos de la víctima”, la “preparación del sujeto cuando recibe el impacto”, el “estado de tensión de los músculos estabilizadores del cuello”, la “posición relativa de las articulaciones”, la “circunferencia del cuello/diámetro del canal medular” y la “resistencia de los ligamentos a las fuerzas de tracción”.

⁵⁸ Con esto, nos referimos a lo que le ocurre a las personas que viajan en el interior de los vehículos, puesto que la fuerza que los desplaza es mayor que la fuerza que se proyecta sobre el vehículo.

⁵⁹ Recomendamos la lectura de la Tabla 1 “Resumen de umbrales lesivos por diferentes investigadores, teniendo en cuenta el tipo de estudio” y la realizada por (Luna, A., Muñoz, J.I., & Represas, C., 2015, p.3), pues se basan en una gran variedad de autores y resulta especialmente clarificadora para entender el por qué de los valores dados y qué consecuencias/riesgos presenta cada uno de ellos.

(p.3). En el artículo referenciado, (Luna, A., Muñoz, J.I., & Represas, C., 2015) resaltan lo siguiente:

El cambio de velocidad implica necesariamente una aceleración. Además, durante el tiempo que dura el cambio de velocidad (Delta-V) la aceleración no es uniforme, distinguiéndose un pico de aceleración y una aceleración media. La aceleración media se corresponde con el valor medio de la aceleración durante el pulso de la colisión, siendo este el tiempo que transcurre hasta que la aceleración cambia de valores positivos a negativos consumido el 90% del Delta-V. Otro hallazgo relevante es que la aceleración media no siempre es igual para un mismo Delta-V, y no es posible identificar una aceleración media típica para un conocido Delta-V, lo que dará lugar a diferentes valores de aceleración media. Cuanto más corto sea el pulso de la colisión, para un mismo Delta-V, mayor será la aceleración media. Por tanto, la forma del pulso de la colisión será importante en la evaluación del riesgo de lesiones cervicales (p.3).

Teniendo en cuenta las investigaciones a las que hacen referencia (Luna, A., Muñoz, J.I., & Represas, C., 2015, p.3), tomando como parámetro la aceleración media, podemos considerar de baja intensidad aquellas que presenten una aceleración media inferior a 4,5 g, de mediana intensidad en las que sea de 5,5 g y de alta intensidad las que superen los 6,5 g (p.3).

A la hora de realizar el estudio de la causalidad entre las lesiones y la entidad del siniestro se pueden emplear tanto los parámetros de la aceleración media, como los del Delta-V, si bien, para que sea realmente válido se deberán tener en cuenta todos los factores a los

que hemos hecho referencia anteriormente⁶⁰. A pesar de que entienden que lo ideal sería realizarlo de forma individualizada y atendiendo a cada uno de los factores que intervienen, (Luna, A., Muñoz, J.I., & Represas, C., 2015) presentan en su Tabla 2 una referencia de los “Umbrales recomendados para el criterio de intensidad en el estudio de la causalidad medico-legal del Síndrome Postraumático Cervical” (p.7). En esta se recoge lo siguiente:

- Un Delta-V menor de 4 km/h o una aceleración media menor de 2 g: “Deberían representar un valor absoluto para la inexistencia de lesiones.
- Para un Delta-V entre 4 y 6 km/h o una aceleración media menor de 3 g: “como norma general no se justifica la existencia de lesiones/síntomas, pero no se puede descartar la existencia de molestias pasajeras (unas horas/2-3 días) fundamentalmente como consecuencia de factores psicológicos. Podría estar justificada la diferencia por sexos, teniendo más riesgo las mujeres de sufrir síntomas”.
- Para un Delta-V entre 6 y 10 km/h o una aceleración media de 3 a 5 g: “no deberían existir lesiones estructurales y los síntomas serían pasajeros, menos de un mes. No obstante deben valorarse factores de riesgo, sistemas de seguridad y otros que se han visto relacionados con la disminución del riesgo de lesiones”.

Los parámetros a los que hemos hechos referencia, son útiles en cuanto a las posibilidades de que se cause una lesión y aparezcan diferentes síntomas – sobretodo cuando se aplican a valores bajos o muy bajos⁶¹ -, en contraposición, no lo son para predecir la severidad y pronóstico de las patologías. Aún así, (Luna, A., Muñoz, J.I., & Represas, C.,

⁶⁰ En este punto coinciden la Jurisprudencia menor que hemos referenciado en las páginas que preceden y (Luna, A., Muñoz, J.I., & Represas, C., 2015).

⁶¹ Por ejemplo, la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia núm. 316/2019, de 3 octubre -RJ 369/2019- en un procedimiento en el que se discute la indemnización del latigazo cervical como consecuencia de una colisión por alcance a baja velocidad, concluye desestimando las pretensiones del demandante debido a que en el informe biomecánico aportado por la demandada se determina el accidente se encuentra por debajo de los umbrales de 8 km/h de velocidad y 2,5 g de aceleración como posibles productores de lesiones.

2015), concluyen su elaborado estudio sobre la “Importancia de la biomecánica del impacto en la valoración pericial del síndrome del latigazo cervical”, recomendando la utilización del Delta-V y especialmente, la aceleración media - por su valor predictor más elevado⁶² - , como criterios de intensidad en el estudio de la causalidad medico-legal del síndrome postraumático cervical (p.7).

5.4.2.El informe de biomecánica.

El Proyecto de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación - y específicamente, la redacción inicial del artículo 135-, recogía “la adecuación biomecánica entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción” dentro de la definición del criterio de intensidad. En cambio, como ya hemos visto al tratar el referido precepto, finalmente se suprimió toda referencia a la misma en la redacción final del artículo 135 de la Ley 35/2015.

A pesar de esto, en casi todos los procedimientos que estamos analizando, cuando la discusión versa sobre la intensidad de los siniestros, se argumenta que las lesiones que son objeto de reclamación no pueden ser consecuencia del accidente debido a su baja intensidad mediante la aportación de un informe biomecánico. Este informe, que tiene la consideración de prueba pericial (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Cuarta, núm. 408/2016, de 18 de julio -RJ 384/2014-*) es elaborado por un ingeniero o perito que realiza un estudio - o debería estudiar⁶³ - de todos los datos, factores técnicos y características individuales que han intervenido en el siniestro y, en base a la intensidad de la colisión, determina si las lesiones que se reclaman han podido producirse como consecuencia

⁶² (Represas, C., 2017, p.67).

⁶³ Atendiendo a la jurisprudencia ya citada y a la valoración judicial que recibe el informe biomecánico como estudiaremos a continuación.

del accidente. La aportación del informe biomecánico como medio de prueba que pretende desvirtuar la concurrencia del criterio de intensidad es una práctica cada vez más recurrente⁶⁴.

Los conceptos, factores técnicos y características que son - o deben ser⁶⁵ - objeto de estudio del informe biomecánico son los que hemos tratado en el ordinal anterior, por lo que, a efectos de no ser reiterativos, vamos a conocer las distintas interpretaciones jurisprudenciales sobre el informe biomecánico y cómo influye en las decisiones judiciales a la hora de apreciar la concurrencia del criterio de intensidad.

En primer lugar, partiremos de la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésimoprimera, núm. 332/2019, de 10 de septiembre -RJ 117/2019- y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Quinta, núm. 179/2017, de 8 de mayo -RJ 161/2017-, en ambas Sentencias se razonó la inhabilidad de informe pericial presentado como única prueba excluyente del nexo de causalidad. Dichas Sentencias coinciden con la argumentación dada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Novena, en su Sentencia núm. 534/2018, de 26 de noviembre -RJ 478/2018-, que, en su Fundamento Primero hace referencia la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, de 17 de octubre de 2012 para discernir sobre la indeterminación de los

⁶⁴ Ejemplo de esto es, entre otros muchos, el procedimiento seguido ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia, en el que la aseguradora a la que se le reclama la indemnización por unas lesiones derivadas de un accidente de tráfico, niega la existencia del necesario nexo de causalidad en base a que la colisión que se produjo no podía generar la entrada de energía suficiente al interior del vehículo y como consecuencia, no tenía la entidad suficiente para producir las lesiones, todo en base al informe biomecánico que la demandada aporta como prueba. No obstante, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia, en su Sentencia núm. 165/2019, de 6 de mayo -RJ 182/2019- entiende que esta interpretación es insuficiente si no se acompaña de pruebas contundentes y claras que determinen la inexistencia del nexo de causalidad entre las lesiones y el siniestro (F.D.2º).

⁶⁵ (De las Heras, M., 2018, p.34) critica que “verdaderamente son informes mecánicos, pues de bio tienen muy poco o nada, al no hacer casi nunca referencia a aspectos físicos del lesionado”. Esta opinión, tal y como veremos, es la que mayoritariamente comparte la Jurisprudencia menor. Un ejemplo de esto es la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Tercera, núm. 196/2020, de 25 de junio -RJ 11/2020-, que en su Fundamento de Derecho Tercero establece: “La prueba pericial que incorrectamente se venía denominando como “biomecánica” -cuando lo analizado no es una ser vivo, sino los daños en los vehículos, por lo que no tiene sentido el uso de la partícula “bio”- y que ahora se conoce como de “reconstrucción mecánica”, no pueden tenerse como elemento probatorio determinante, por cuanto no pasa de ser una mera evaluación estadística carente del mínimo rigor exigible a toda prueba pericial que se presenta ante un tribunal de justicia”.

informes biomecánicos aplicados a las colisiones a baja velocidad "no sólo por la distinta consideración que merece la absorción del impacto a escasas velocidades en vehículos de una cierta antigüedad frente a los más modernos, sino por las propias características físicas de los ocupantes del vehículo afectado, lo que determina un enorme relativismo que impide conclusiones cerradas"⁶⁶.

Recordamos, que este mismo criterio es el que aplicaban las Sentencias - que hemos referenciado anteriormente - al tratar las colisiones a baja velocidad y los factores que influyen a la hora de reconstruir el siniestro producido y determinar la existencia o inexistencia del criterio de intensidad (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 414/2020, núm. 414/2020, de 16 de julio -RJ 287/2020-*). En este sentido, se pronuncia la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Asturias, en su Sentencia núm. 169/2014, de 7 de julio -RJ 176/2014-; y núm. 160/2018 de 20 abril -RJ 70/2018-. Ambas mantienen la ineficacia probatoria de estos informes por si solos para acreditar la inexistencia del nexo de causalidad entre las lesiones y el siniestro producido. Más aún en estos procedimientos en los que el informe biomecánico se había elaborado sin tener en cuenta ninguna de las circunstancias en las que tuvo lugar el accidente, llegando a ser, incluso sobre vehículos distintos de los que habían intervenido en los siniestros⁶⁷.

Respecto al valor probatorio del informe biomecánico, resaltamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Doceava, núm. 36/2019, de 30 de enero -RJ 845/2017-; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, Sección Primera, núm. 383/2020, de 17 de julio -RJ 634/2019-; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Segunda, núm. 236/2016, de 20 de septiembre -RJ 506/2016-; y la Sentencia de la

⁶⁶ (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, de 17 de octubre de 2012).

⁶⁷ Finalmente, dichas Sentencias estimaron las pretensiones de los demandantes al entender que el nexo de causalidad había quedado acreditado.

Audiencia Provincial de Madrid, Sección Doceava, núm. 215/2018, de 31 de mayo -RJ 34/2018-. En el Fundamento Tercero de esta última se recoge:

Tal informe, si bien contiene una parte basada en la mecánica que puede sustentarse en conclusiones estrictamente técnicas y seguras, tiene otra que no posee ese grado de certeza. En efecto, cuando los resultados mecánicos se pretenden trasladar a la incidencia que pueden tener en el cuerpo humano, las conclusiones y los parámetros que se tienen en cuenta, se basan exclusivamente en datos estadísticos, de manera que indican una mera probabilidad pero no una certeza. Como las normas comunes de experiencia enseñan, la reacción del cuerpo humano ante la misma agresión física no es exactamente la misma de una persona a otra, o incluso, por incidencia de múltiples factores, en la misma persona, contemplada en distintas ocasiones (F.3º)⁶⁸.

A su vez, debemos tener en cuenta lo expuesto, entre otras, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosexta, núm. 179/2019, de 29 de abril -RJ 172/2019-, que igualmente concibe que el informe biomecánico se ha realizado en base a datos meramente estadísticos y sobre el mismo debe prevalecer el informe médico (en este caso del servicio médico de urgencias) en el que se evidencia la existencia de unas lesiones que son compatibles con el siniestro producido. En igual sentido se pronuncian la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en su Sentencia núm. 542/2015, de 12 de noviembre -RJ675/2014-; la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León en su Sentencia núm. 118/2020, de 12 de mayo, -RJ 373/2019-; la Sección Vigésimoprimera de la

⁶⁸ El mismo argumento siguen con carácter general, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, núm. 515/2018, de 20 de noviembre -RJ 523/2018-; Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 414/2020, núm. 414/2020, de 16 de julio -RJ 287/2020-la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena, núm. 404/2018, de 4 de octubre -RJ 453/2018-; y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, núm. 289/2018, de 18 de julio -RJ 353/2018-.

Audiencia Provincial de Madrid en su Sentencia núm. 332/2019, de 10 de septiembre -RJ 117/2019- y la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid en su Sentencia núm. 17/2020, de 15 de enero -RJ 947/2019-, que cita la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Primera, núm. 134/2018, de 26 de febrero -RJ 138/2018-.

A pesar de todos estos criterios jurisprudenciales que hemos recogido, también encontramos Sentencias en las que entiende que, en base al informe biomecánico, no se ha producido una colisión de entidad suficiente como para producir las lesiones que son objeto de reclamación. Así, destacamos: la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoséptima, núm. 236/2020, de 22 de octubre -RJ 950/2019-; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, Sección Cuarta, núm. 244/2017, de 29 de junio -RJ 231/2017-, que versa sobre una colisión en la que el informe biomecánico, que se elabora atendiendo a todas las características del siniestro, aprecia un valor Delta-V de 4,4 km/h y 4,8 km/h. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Octava, núm. 19/2017, de 26 de enero de 2017 -RJ 519/2016-, que, en base al informe de biomecánica en el que se alega una velocidad alcanzada en la colisión de 2 km/ y 4 km/h y demás factores que intervienen, la Audiencia concluye que el siniestro no tiene una fuerza mínimamente suficiente para producir las lesiones. Y por último, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, núm. 235/2018, de 4 de junio -RJ 66/2018-, se trata de un supuesto en el que las pruebas practicadas no acreditan la relación de causalidad entre el siniestro y las lesiones. En cambio, el informe biomecánico aportado determina que, teniendo en cuenta la velocidad a la que se produjo el accidente y atendiendo a los escasos daños materiales que presentaban los vehículos intervinientes, existía un riesgo de lesión cervical nulo.

6. Aplicación práctica de los criterios.

Se anexan con los números 2 y 3, dos ejemplos prácticos de informe de valoración que han sido realizados en colaboración con la Médico Especialista en Valoración del Daño Corporal, Doña Ángela Córdoba. En ellos se ha tratado de aplicar todos los conceptos que hemos abordado en relación con el artículo 135 de la Ley 35/2015 y ambos están basados en hechos reales.

Con carácter previo, destacamos que en los dos supuestos planteados, no se ha considerado la existencia de secuelas. En aplicación del artículo 135.1 de la Ley 35/2015, se han valorado como lesiones temporales al tratarse de síntomas no objetivables.

En el primero de ellos (Anexo II, Informe de Oferta Motivada), se entiende que existe un nexo de causalidad entre el accidente de tráfico y las lesiones que sufre – y por las que reclama – el perjudicado. Se trata de un informe solicitado por la compañía aseguradora para realizar Oferta Motivada, emitido tras la evaluación o seguimiento de la perjudicada y que, al no discutir el nexo de causalidad, es más genérico.

En resumen, se da un impacto de suficiente entidad para provocar lesiones, hay un traumatismo cervical de carácter leve consistente en un síndrome de latigazo cervical y se considera que el impacto ha podido ser la causa de dichas lesiones.

En el segundo ejemplo (Anexo III, Informe de Oferta Motivada con discusión de nexo causal), nos situamos ante un impacto lateral en el que el lesionado presenta daños en el hombro izquierdo por donde recibió el impacto y molestias cervicales de las que es atendido de manera inmediata, realizando un ciclo de rehabilitación para recuperarse. Una vez finalizado este ciclo, el lesionado indica que empieza a sufrir mareos y realiza un segundo ciclo de rehabilitación.

Un médico Especialista en Valoración Corporal, por encargo de la compañía aseguradora y tras la evaluación o seguimiento del perjudicado, emite informe para realizar Oferta Motivada en el que se hace constar que las lesiones consistentes en esguince cervical grado I y contusión en hombro izquierdo, así como el primer tratamiento rehabilitador, si tienen relación de causalidad con el accidente. Destacan que el lesionado ya tenía patologías previas consistentes en calcificaciones periarticulares a nivel del hombro izquierdo, las cuales se constatan en las pruebas de diagnóstico que se realizan al ser atendido de urgencias y que son lesiones previas a sufrir el accidente y, así mismo, se señala que los mareos no guardan relación con el accidente porque aparecen varios meses después del mismo y el lesionado en ningún momento ha hecho mención a los mismos hasta después de haber concluido el primer tratamiento rehabilitador.

Por lo tanto, en este último informe, se discute el elemento cronológico y el de exclusión. En cambio, a pesar de que - como hemos comentado a lo largo del presente trabajo -, el criterio de intensidad es el que más controversias plantea en la práctica, en este supuesto se entiende que se cumple el criterio como consecuencia del informe de biomecánica, que acredita la intensidad para el tipo de colisión en valores de Delta V, por lo que los daños materiales son compatibles.

7. La oferta motivada.

Al realizar la aplicación práctica de los criterios de causalidad genérica hemos hecho referencia a la “oferta motivada”. Los supuestos que se han planteado en el ordinal anterior consisten en ejemplos prácticos de informes de valoración solicitados por una compañía aseguradora para realizar dicha oferta.

En este sentido, debemos mencionar que, conforme al artículo 7.1 de la Ley 35/2015, a la hora de requerir una indemnización, tanto en los supuestos que nos ocupan, como de forma general, se establece que con carácter previo a la interposición de la demanda, es necesario realizar una reclamación extrajudicial al asegurador que esté obligado a reparar los daños sufridos (*véase el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Sexta, núm. 87/2020, de 27 de febrero -RJ 848/2019-*). Esta reclamación extrajudicial debe contener todos los datos relevantes de los que disponga el lesionado⁶⁹ y deberá cumplir los requisitos de este precepto que la regula, no siendo exigible al perjudicado que cuantifique la indemnización correspondiente a su reclamación. Dicha reclamación extrajudicial interrumpe el plazo de prescripción desde su presentación, hasta que el asegurador conteste fehacientemente con una “oferta o respuesta motivada definitiva” (artículo 7.1, Ley 35/2015).

El apartado segundo del artículo 7 de la Ley 35/2015, le otorga al asegurador que ha recibido una reclamación previa un plazo de 3 meses para contestar de forma fehaciente a la misma, comunicando si está de acuerdo o no con la reclamación (artículo 7.2, Ley 35/2015). Teniendo en cuenta esto, podemos encontrarnos con los siguientes escenarios:

- Primero: puede darse en caso de que el asegurador considere que se ha acreditado su responsabilidad y que se ha cuantificado correctamente el daño, éste debe presentar una “oferta motivada de indemnización” que cumpla con los requisitos exigidos para su validez y que vienen regulados en el artículo 7.3 de la Ley 35/2015.
- Segundo: puede darse en caso de que considere que no se ha acreditado su responsabilidad, que no esté conforme con la cuantificación del daño, o que rechace la

⁶⁹ Los artículos 7 y 37 de la Ley 35/2015 regulan el deber de colaboración del perjudicado, va en contra de este deber presentar una reclamación dificultando la cuantificación del daño, la determinación de la responsabilidad u ocultando información.

reclamación, igualmente deberá presentar una “respuesta motivada” que se ajuste a los requisitos exigidos en el artículo 7.4 de la Ley 35/2015.

- Tercero: también puede darse que transcurra el plazo de 3 meses otorgado por la ley y que el asegurador no haya presentado la oferta motivada de indemnización. En este caso, salvo que la ausencia de oferta motivada se deba a una causa justificada o a una causa no imputable al asegurador, comenzarán a devengarse intereses de demora conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 35/2015⁷⁰ (*véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección Primera, núm. 24/2019, de 16 de enero -RJ 59/2019-; y la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm.137/2020 de 2 de marzo -RJ 2679/2017-*).

Es necesario destacar que tal y como se recoge en el artículo 7.2 de la Ley 35/2015, si el asegurador incumple su obligación de presentar, bien la oferta motivada, o bien la respuesta motivada, constituirá una infracción administrativa, que podrá ser grave o leve⁷¹.

En relación con el primer y segundo escenario que acabamos de plantear, es preciso traer a colación lo recogido en el último párrafo del artículo 7.2 de la Ley 35/2015, por el que se establece que, con carácter previo a la emisión de la oferta motivada de indemnización, cuando el asegurador entienda que no es suficiente la documentación que le ha aportado el lesionado para cuantificar el daño, puede instar aquellos informes periciales que sean pertinentes, debiendo realizarlos a su costa, ya sea a través de un servicio concertado o propio.

⁷⁰ Igualmente, se devengarán estos intereses en caso de que el perjudicado acepte la oferta motivada y el asegurador no la satisfaga en un plazo de cinco días o no haya consignado para pago la cantidad ofrecida (artículo 7.2, Ley 35/2015).

⁷¹ (artículo 7.2 de la Ley 35/2015)

En este punto, entra de nuevo en juego lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 35/2015, el cual ya hemos abordado en el apartado 4.2. del presente trabajo, “El informe médico concluyente” (página 22). Por lo tanto, simplemente hemos de recalcar que, por su aplicación, el lesionado deberá permitir que los servicios médicos de la aseguradora a la que reclama realicen su exploración y reconocimiento para la valoración de las lesiones y secuelas. De no ser así, puede incurrir en las penalizaciones que se recogen en el precepto citado.

En cuanto a la oferta motivada, conforme a lo dispuesto en los artículos 7.2 y 7.3 de la Ley 35/2015, en ella deberán estructurarse y desglosarse todos y cada uno de los conceptos por los que corresponde la indemnización, indicando los importes que respectivamente pertenecen a cada concepto. La finalidad es que el lesionado conozca de forma clara tanto la integridad del importe que se ofrece como indemnización, como un desglose de todos los importes que parcialmente componen esa totalidad. Igualmente, de cara a que el lesionado pueda decidir justamente si aceptar o rechazar la oferta presentada, es necesario que la oferta incluya un informe médico definitivo e identifique aquellos informes que ha empleado a la hora de determinar la indemnización correspondiente⁷².

Los requisitos de la respuesta motivada que se recogen en el artículo 7.4 de la Ley 35/2015, coinciden con los exigidos para la oferta motivada respecto de la adecuada información al lesionado, como por ejemplo, incluir todos los documentos e informes médicos de los que se disponga⁷³. Si bien, varían en algunos aspectos, ya que en este caso, deberán indicarse cuáles son los motivos que imposibilitan presentar la correspondiente

⁷² Por ejemplo, vemos como en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Quinta, núm. 391/2017, de 17 de noviembre -RJ 437/2017-, en su Fundamento Segundo, aplica a la cuantía indemnizatoria el interés del artículo 20 LCS como consecuencia de que la aseguradora no adjunta a la oferta motivada el informe médico relativo a la determinación y medición de las secuelas y lesiones temporales, contraviniendo así lo dispuesto en el artículos 7.3.c y 37.2 de la Ley 35/2015.

⁷³ (artículo 7.4.b, Ley 35/2015).

oferta motivada de indemnización, identificando si se debe a la falta de determinación de responsabilidad, a la imposibilidad de cuantificar el daño u otra causa que se fundamente⁷⁴. Cuando la imposibilidad de cuantificar el daño se deba bien, a que el proceso de curación del lesionado no ha finalizado y no es posible determinar el alcance definitivo de las secuelas, o bien porque no fuera posible determinar completamente el daño, igualmente se deberá hacer referencia a la posibilidad de realizar “pagos a cuenta” o “pagos parciales anticipados a cuenta” que deberán imputarse a la indemnización que resulte finalmente y el asegurador deberá comprometerse a presentar oferta motivada en cuanto los daños hayan podido cuantificarse⁷⁵. Igualmente, deberá mencionarle al lesionado que no es necesario que acepte o rechace esta respuesta motivada y que la misma no afecta al ejercicio de las acciones que sean pertinentes para hacer valer sus derechos⁷⁶.

En relación con las posibles malas prácticas que se pueden dar en la interpretación y la aplicación de este artículo 7 de la Ley 35/2015 que hemos desgranado, llama la atención lo recogido en el Informe razonado previsto por la Disposición Adicional Primera de la Ley 35/2015 que ha elaborado la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de Daño Corporal de la Ley 35/2015 (en adelante, Informe Razonado CSSVDC).

Por ejemplo, sobre la aportación del informe médico que justifique la oferta motivada, en su párrafo 2.28 (p.30), recoge lo siguiente:

La mala práctica de no aportar el preceptivo informe médico definitivo, o bien de aportar un informe médico sin expresión de puntuación o sin especificar grados de pérdida de calidad de vida en secuelas o en lesiones temporales, constituye otro aspecto controvertido respecto a la práctica resarcitoria en estos últimos tres años.

⁷⁴ (artículo 7.4.a, Ley 35/2015).

⁷⁵ (artículo 7.4.a, Ley 35/2015).

⁷⁶ (artículo 7.4.c, Ley 35/2015).

Así, mientras que las entidades consideran que esta es una mala práctica excepcional o muy infrecuente, numerosas respuestas del sector de víctimas cifran el caso en una frecuencia superior al 50%.

Del mismo modo, esto sucede cuando se trata la preceptiva aportación de informe médico que justifique la respuesta motivada, así en el párrafo 2.38 del Informe Razonado CSSVDC se plasma “una denuncia muy consistente en las respuestas del sector de abogados y de víctimas en el sentido de que entre el 50% y el 90% de los casos no incorporan ese documento a la respuesta motivada” (p.33).

Debemos tener en cuenta que la regulación de la oferta motivada a la que hemos hecho referencia, “constituye un mecanismo esencial de protección de los intereses de los perjudicados que se considera insustituible”, así lo declaró la Comisión de Seguimiento de la aplicación del Baremo de tráfico de la Ley 35/2015 en el Acuerdo de 14 de septiembre de 2017 que se incluye en la Guía de buenas prácticas para la aplicación del baremo de autos (en adelante, Guía de buenas prácticas). Como consecuencia de estas malas prácticas que se pueden dar en algunos supuestos a la hora de aplicar lo dispuesto en la Ley 35/2015, como es el caso, entre otros, de que no se incluya el informe médico definitivo al presentar la oferta o respuesta motivada, se ha elaborado esta Guía de buenas prácticas, cuyo fin es paliar y evitar conductas contrarias a la buena praxis⁷⁷. Es por esto que, para conocer la correcta interpretación y funcionamiento de la Ley 35/2015, recomendamos su lectura.

⁷⁷ Respecto de la oferta y respuesta motivada, véase los Acuerdos de la Comisión de 27 de noviembre de 2017, de 6 de marzo de 2018 de la Guía de buenas prácticas.

8. Conclusiones

El artículo 135 de la Ley 35/2015 nació como un medio para acabar con los frecuentes fraudes por reclamaciones en base a lesiones cuya existencia o inexistencia no es constatable por medios objetivos de diagnóstico. Se ha conseguido que se reduzcan esas reclamaciones fraudulentas en base a que el lesionado ya sabe que sólo podrá reclamar dentro de unos márgenes y que su dolencia no podrá basarse únicamente en su manifestación de dolor, pues se aplicarán los tiempos medios de curación y además, solo se admitirán las lesiones en relación con accidentes capaces de producirlas. Entendemos, al igual que diversos autores cuyos artículos se han estudiado para la elaboración del presente Trabajo, que se produce definitivamente dicho efecto disuasorio.

Al elaborar este estudio, se han tratado de plasmar los distintos y contrapuestos criterios jurisprudenciales que se aplican a la hora de valorar la existencia o inexistencia del nexo de causalidad en los supuestos que nos ocupan. Lo que se debe, fundamentalmente, a que los Tribunales deben atender a las circunstancias y factores concretos que intervienen en cada siniestro. Finalmente, esto nos lleva a concluir que en este tipo de reclamaciones, tanto los perjudicados, como las aseguradoras, se van a encontrar con la dificultad procesal de ceñirse a las pruebas y a todos los medios que tengan a su alcance y que puedan empleados para tratar de acreditar o desacreditar el nexo de causalidad y del alcance de las lesiones.

En este sentido, debemos tener en cuenta que, en caso de discrepancias y de no aceptarse la oferta motivada, las partes - lesionado y aseguradora-, no se encuentran en pie de igualdad, ya que no disponen de los mismos medios. La aseguradora tiene profesionales de la medicina y peritos que trabajan para ella y emite los informe médicos y biomecánicos, mientras que el lesionado ha de buscar un técnico, ya sea médico o perito, para ese caso concreto y abonar unos honorarios antes de iniciar su reclamación. Es obvio que esto le puede

impedir acceder a la vía judicial o puede conllevar que no le merezca la pena, ya que estamos hablando de indemnizaciones por traumatismos leves de columna.

9. Bibliografía

Acevedo, R. D. (2013). “Una mirada a la responsabilidad civil española: el régimen subjetivo”. *Revista Científica Guillermo de Ockham*, vol. 11, núm. 2, pp. 79-88.

Astray, M.P. (2019). “Traumatismo menor de columna y criterios de causalidad en la Ley 35/2015”. *Diario La Ley*, núm. 12382.

Badillo, J.A. (2016). “Problemas prácticos que se plantean en la aplicación del nuevo sistema de valoración de daños personales en accidentes de circulación”. *Curso de Mediación impartido por el ICAM*, 2016-2017.

Badillo, J. A. (2016). *La responsabilidad civil automovilística. El hecho de la circulación* (1a edición.). Cizur Menor, Navarra: Aranzadi.

Busto, J. M., & Reglero, L. F. (2014). *Tratado de responsabilidad civil*. Recuperado de: <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/monografias/133431127/v5>

Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de Daño Corporal de la Ley 35/2015. (2020). Informe razonado previsto por la Disposición Adicional Primera de la Ley 35/2015. Recuperado de: <https://cpage.mpr.gob.es/producto/informe-razonado-previsto-por-la-disposicion-adicional-primera-de-la-ley-35-2015-3/>

De las Heras, M. (2018). “El artículo 135 de la LRCSCVM introducido por la ley 35/2015”. *Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro*, núm. 67, pp. 29-42.

España. Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en

accidentes de circulación. (Internet). *Boletín Oficial del Estado* núm. 98, de 8 de abril de 2020. (Cita en texto: Resolución 4371/2020). Recuperado de: <https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/30/1>

España. Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial sobre “La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y protección de los derechos de las víctimas en el ámbito de la siniestralidad vial”, pp. 1-80, Madrid, 13 de julio de 2016. (Cita en texto: Dictamen FSCSV 3/2016 sobre la Ley 35/2015). Recuperado de: <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/dictamen-3-2016-fiscal-645691237>

España. Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor. (Internet). *Boletín Oficial del Estado* núm. 303, de 19 de diciembre de 2015. (Cita en texto: Real Decreto 1148/2015). Recuperado de: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/12/18/1148>

España. Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (Internet). *Boletín Oficial del Estado* núm. 228, de 23 de septiembre de 2015. (Cita en texto: Ley 35/2015). Recuperado de: <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/09/22/35>

España. Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. (Internet). *Boletín Oficial del Estado* núm. 267, de 5 de noviembre de 2004. (Cita en texto: Real Decreto 8/2004). Recuperado de: <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/10/29/8/con>

- España. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. (Internet). *Gaceta de Madrid* núm. 206, de 25 de julio de 1889. (Cita en texto: Código Civil). Recuperado de: [https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con)
- España. Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. (Internet). *Boletín Oficial del Estado* núm. 250, de 17 de octubre de 1980. (Cita en texto: Ley de Contrato de Seguro). Recuperado de: <https://www.boe.es/eli/es/l/1980/10/08/50/con>
- Gallardo, N. (2016). “El informe médico concluyente”. *Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro*, núm. 57, pp. 49-46.
- Gascón, M. (2017). “Valoración de la prueba y causalidad jurídica”. *Ciencia Forense*, núm. 14, pp. 77-96.
- Gómez-Cornejo, L. (2017). “Reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, a raíz de la Ley 35/2015 de 22 de septiembre”. *Actualidad Civil*, núm. 2.
- Gullón, A., & Díez-Picazo, L. (2015). *Sistema de Derecho Civil: Vol. II. Tomo II* (11.^a ed.). Madrid: Tecnos.
- Hinojal, R. (1996). *Daño corporal: fundamentos y métodos de valoración médica*. Oviedo: Arcano Medicina.
- Larrosa, M.A. (2013). “El nexo de causalidad en las colisiones por alcance a baja velocidad”. *Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro*, núm. 47, pp. 9-32.
- Luna, A., Muñoz, J.I., & Represas, C. (2015). “Importancia de la biomecánica del impacto en la valoración pericial del síndrome del latigazo cervical”. *Revista Española de Medicina Legal*, núm. 162, pp. 1-9.

- Marín, J.J. (2016). "La aplicación en el tiempo de la Ley 35/2015: algunas cuestiones problemáticas". *Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro*, núm. 58, pp. 23-38.
- Melchori, F.A (marzo 2020). *Las teorías de la causalidad en el daño: equivalencia de las condiciones, causalidad adecuada e imputación objetiva en la doctrina del Tribunal Supremo*. J.M.Bosch.
- Ministerio de Justicia y Ministerio de Economía y Empresa. (2017). "Acuerdos de la Comisión de 14 de septiembre de 2017". *Guía de Buenas Prácticas de la Comisión de Seguimiento de la aplicación del Baremo de tráfico de la Ley 35/2015*. Recuperado de:
<http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/BUENAS%20PRACTICAS.pdf>
- Ortiz, V. (2017). "Introducción al análisis del nexo de causalidad médico-legal". *Ciencia Forense*, núm. 14, pp. 11-28.
- Peña, M. (2019). "El nexo causal en accidentes de tráfico. Aspectos jurídicos y biomecánicos". *Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro*, núm. 69, pp. 17-38.
- Pomares, J.A. (2018). *Sistema legal de indemnizaciones por daños personales en accidentes de tráfico*. Madrid: Dykinson.
- Represas, C. (2017). "Nexo de causalidad en accidentes de tráfico". *Ciencia Forense*, núm. 14, pp.61-76.
- Represas, C. (2013). "Traumatismos cervicales leves. Criterios de causalidad. Aplicación de los estudios biomecánicos". *Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro*, núm. 8, pp. 38-43.

- Rial, C. (2018). “Pruebas biomecánicas y nexo causal”. *Boletín Galego de Medicina Legal e Forense*, núm. 24 , pp.77-81.
- Rivas, M^a J. (2019). “Nexo causal y su prueba tras la Ley 35/2015”. *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 8/2019.
- Velasco, J.C. (2016). “El nexo causal en las colisiones a baja velocidad. La pericial biomecánica. Desmontando la teoría aseguraticia”. *Diario La Ley*, núm. 8676, Sección Dossier.
- Velasco, J.C. (2016). “Los criterios de causalidad genérica en las colisiones a baja velocidad y la pericial biomecánica a raíz de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”. *Tráfico y Seguridad Vial*, núm. 207, Sección Doctrina.

ANEXO I. JURISPRUDENCIA.

TRABAJO FIN DE MASTER DE ORIENTACIÓN INVESTIGADORA

EL NEXO DE CAUSALIDAD EN LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

Autora: Ana Gálvez Molina

Tutora: María José Peñalosa Revidiego

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm.159/2020, de 10 de marzo -RJ 1449/2017-.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm.137/2020 de 2 de marzo -RJ 2679/2017-.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, de 17 de octubre de 2012.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 536/2012, de 10 de septiembre -RJ 1740/2009-.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 905/2011, de 30 de noviembre -RJ 737/3518-.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 83/2010, de 22 de febrero -RJ 356/2007-.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm.725/2010 de 25 de noviembre de 2010 -RJ 2011/583-.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 701/2010, de 4 de noviembre -RJ 2051/2006-

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 303/2006, de 29 de marzo-RJ 3816/1999-.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 100/2000, de 14 febrero -RJ 1460/1995-.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 712/1996, de 16 de septiembre -RJ 4029/1992-.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de Octubre de 1.990 -RJ 1990/8053-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, Sección Primera, núm. 383/2020, de 17 de julio -RJ 634/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Novena, núm. 534/2018, de 26 de noviembre -RJ 478/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Octava, núm. 19/2017, de 26 de enero de 2017-RJ 519/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sala de lo Civil, Sección Cuarta, núm. 373/2016, de 23 de noviembre -RJ 320/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Novena, núm. 146/2016, de 1 de abril -RJ 622/2015-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Novena, núm. 357/2015, de 6 de octubre -RJ 321/2015-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, Sección Primera, núm. 352/2017, de 18 julio -RJ 843/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Quinta, núm. 398/2020, de 10 de noviembre -RJ 427/2020-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Sexta, núm. 160/2018, de 20 de abril -RJ 70/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Quinta, núm. 391/2017, de 17 de noviembre -RJ 437/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Quinta, núm. 384/2017, de 10 de noviembre -RJ 431/2017-.

Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Asturias, en su Sentencia núm. 179/2017, de 8 de mayo -RJ 161/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Séptima, número 475/2016, de 1 de diciembre -RJ 593/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Sexta, núm. 169/2014, de 7 de julio -RJ 176/2014-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Catorceava, núm.317/2020, de 18 de noviembre -RJ 944/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, núm. 482/2020, de 9 de noviembre -774/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoséptima, núm. 236/2020, de 22 de octubre -RJ 950/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimonovena, núm. 123/2020 de 4 junio -RJ 444/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, núm. 33/2020, de 3 de febrero -RJ 46/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosexta, núm. 179/2019, de 29 de abril -RJ 172/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, núm. 84/2018, de 16 de febrero -RJ. 568/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, núm. 116/2017, de 28 de febrero -RJ 508/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Segunda, núm. 15/2017, de 24 de enero de 2017 -RJ 396/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Primera, núm. 134/2018, de 26 de febrero -RJ 138/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Primera, núm. 202/2017, de 12 de abril -RJ 233/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Segunda, núm. 8/2020, de 20 enero - RJ 638/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Segunda, núm. 237/2017, de 12 de septiembre de 2017 -RJ 635/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Segunda, núm. 341/2016, de 20 de diciembre -RJ 236/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Segunda, núm. 236/2016, de 20 de septiembre -RJ 506/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Segunda, núm. 213/2014, de 11 de septiembre -RJ 353/2014-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Tercera, núm. 196/2020, de 25 de junio -RJ 11/2020-.

Sentencia de la Audiencia provincial de A Coruña, Sección Quinta, núm. 292/2017, de 2 de noviembre -RJ 5/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sala de lo Civil, Sección Cuarta, núm. 335/2017, de 13 de octubre -RJ. 337/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Cuarta, núm. 72/2017, de 2 de marzo -RJ 524/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sección Segunda, número 165/2020 de 15 de mayo -RJ 148/2020-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sección Segunda, núm. 134/2020, de 24 de abril -RJ 134/2020-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, núm. 323/2019, de 22 de noviembre -RJ 438/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, núm. 279/2017, de 24 de noviembre -RJ 368/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, núm. 251/2017, de 3 de noviembre -RJ 253/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera, núm. 325/2017, de 25 octubre -RJ 173/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera, núm. 285/2017, de 26 septiembre -RJ 136/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, núm. 223/2016, de 7 de octubre -RJ 334/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección Tercera, núm. 249/2016, de 20 octubre -RJ 3313/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, Sección Cuarta, núm. 244/2017, de 29 de junio -RJ 231/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección Segunda, núm. 118/2020, de 12 de mayo, -RJ 373/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección Primera, núm. 304/2019, de 4 julio - RJ 314/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, Sección Primera, núm. 475/2019, de 13 de noviembre - RJ 643/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, Sección Primera, número 252/2015, de 22 de junio - RJ 11/2015 -.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, núm. 121/2020, de 27 de mayo -RJ 37/2020-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésimoprimera, núm. 332/2019, de 10 de septiembre -RJ 117/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, núm. 316/2019, de 3 de octubre -RJ 369/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, núm. 127/2019, de 23 de mayo -RJ 746/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Doceava, núm. 36/2019, de 30 de enero -RJ 845/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, núm. 28/2019, de 28 de enero -RJ 428/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, núm. 17/2019, de 19 de enero -RJ 240/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, núm. 17/2020, de 15 de enero -RJ 947/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, núm. 515/2018, de 20 de noviembre -RJ 523/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena, núm. 404/2018, de 4 de octubre -RJ 453/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, núm. 289/2018, de 18 de julio -RJ 353/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, núm. 235/2018, de 4 de junio -RJ 66/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Doceava, núm. 215/2018, de 31 de mayo -RJ 34/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, núm. 180/2018, de 10 de mayo -RJ 149/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, núm. 17/2016, de 19 de enero -RJ 16/2015-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, núm. 325/2020, de 30 de junio -RJ 854/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Cuarta, núm. 397/2018, de 18 de junio -RJ 860/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Cuarta, núm. 408/2016, de 18 de julio -RJ 384/2014-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Primera, núm. 165/2019, de 6 de mayo -RJ 182/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Quinta, núm. 86/2020, de 14 de febrero -RJ 232/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, Sección Primera, número 164/2012, de 4 de septiembre -RJ 121/2012-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 414/2020, núm. 414/2020, de 16 de julio -RJ 287/2020-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Sexta, núm. 667/2016, de 26 de diciembre -RJ 184/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Primera, núm. 522/2016, de 10 de noviembre -RJ 583/2016-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Primera, núm. 83/2016, de 19 de febrero -RJ 842/2015-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Sexta, núm. 118/2015, de 12 de noviembre -RJ675/2014-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, Sección Primera, núm. 336/2013, de 15 de octubre -RJ 274/2013-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Tercera, núm. 226/2020, de 25 de julio -RJ 902/2018-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Octava, núm. 389/2020, de 3 de julio -RJ 409/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Sexta, núm. 87/2020, de 27 de febrero -RJ 848/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, núm. 575/2019, de 26 diciembre -RJ 198/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección Primera, núm. 24/2019, de 16 de enero -RJ 59/2019-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, núm. 166/2018, de 19 de marzo -RJ 726/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Quinta, núm. 323/2017, de 5 diciembre -RJ 348/2017- (F.D.2°).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, núm. 562/2017, de 8 septiembre -RJ 252/2017-.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, Sección Primera, núm. 142/2020, de 17 de abril -RJ 456/2019- .



ANEXO II. INFORME DE OFERTA MOTIVADA.

TRABAJO FIN DE MASTER DE ORIENTACIÓN INVESTIGADORA

EL NEXO DE CAUSALIDAD EN LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

Autora: Ana Gálvez Molina

Tutora: María José Peñalosa Revidiego

VALORACIÓN DE DAÑOS PERSONALES
(INFORME DE OFERTA MOTIVADA LEY 35/2015)

1. Solicitante del informe:

Entidad aseguradora: XXX SEGUROS

Número de siniestro: 18062672

2. Identificación del perito valorador:

Dra. XX colegiado XXXX

Visitas efectuadas al lesionado: 30.12.2019, 28.01.2020, 08.02.2020.

3. Datos del lesionado

Nombre y apellidos: XX

DNI: XX

Fecha del accidente: 26 de diciembre del año 2019.

Edad: 21 años en la fecha del accidente

Accidente laboral: No.

Sexo: Mujer

Profesión/Ocupación: Peón de mantenimiento (en activo en la fecha del accidente).

4. Fuentes del informe:

Tras haber obtenido el preceptivo consentimiento informado de la lesionada, el presente informe se basa en la siguiente documentación médica examinada:

DOCUMENTO UNO: 26.12.2019: Informe clínico tras asistencia en servicio de urgencias del H. de San Juan de Dios, firmado por la Dra. xx.

DOCUMENTO DOS: 02.01.2020/03.02.2020: Certificado asistencia a rehabilitación H. San Juan de Dios.

DOCUMENTO TRES: 30.12.2019: Informe clínico emitido por especialista en traumatología del H. de San Juan de Dios, firmados por el Dr. XX

DOCUMENTO CUATRO: 03.02.2020: Informe clínico de alta médica emitido por especialista en traumatología del H. de San Juan de Dios, firmados por el Dr. XX

DOCUMENTO CINCO: 26.12.2019/30.12.2019: Partes de baja y alta laboral emitidos por médico de atención primaria.

5. Descripción del accidente.

La lesionada sufrió accidente de circulación en posición de conductora cuando recibió el alcance trasero de un segundo vehículo por alcance.

6. Antecedentes patológicos relacionados con el accidente:

No se constatan antecedentes patológicos ni quedan registrados en la documentación médica examinada.

7. Descripción de las lesiones sufridas (diagnósticos).

Esguince cervical grado I.

8. Tratamiento realizado y evolución clínica, especificando centro y fecha de la primera asistencia:

- 26.12.2019. Evaluada inicialmente en servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios, presentando *dolor cervical y mareo*, control radiológico y prescripción medicación sintomática y collarín cervical.
- Cursó baja laboral 26.12.2019 y alta laboral 30.12.2019.
- 02.01.2020: Inicia proceso de rehabilitación en centro de convenio (H. San Juan de Dios), un total de 15 sesiones en periodo del 02.01.2020 al 03.02.2020.

9. Estado actual. Resultado de la exploración física al alta (08.02.2020).

Refiere mejoría sintomática. Movilidad cervical conservada en su totalidad, no puntos dolorosos a la palpación, no radiculalgia. Funcionalidad normalizada.

10. Consideraciones Médico-Legales sobre la existencia de criterios de causalidad entre las lesiones sufridas y el accidente, con especial consideración a los traumatismos menores de la columna vertebral.

- De exclusión: consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología.
- Cronológico: consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable.
- Topográfico: consiste en que exista una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario.
- De intensidad: que consiste en la adecuación biomecánica entre la lesión sufrida y el mecanismo de producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia.

Las lesiones que presentó cumplen los criterios de causalidad mencionados.

11. Perjuicio personal básico y por pérdida temporal de calidad de vida:

Pérdida temporal de calidad de vida básico	35
Pérdida temporal de calidad de vida moderado	5
Pérdida temporal de calidad de vida grave	0
Pérdida temporal de calidad de vida muy grave	0
TOTAL	40

12. Perjuicio personal por intervenciones quirúrgicas: NO

13. Secuelas (indicar código de la tabla 2.A.1 y su puntuación): NO

Traumatismo menor de la columna y se ha valorado como lesión temporal sin secuelas.

14. Perjuicio estético: NO

- 15. Perjuicio por pérdida de calidad de vida por secuelas: NO**
- 16. Daño moral complementario por perjuicio psico-físico: NO**
- 17. Daño moral complementario por perjuicio estético: NO**
- 18. Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares: NO**
- 19. Pérdida de feto a consecuencia del accidente: NO**
- 20. Gastos previsibles de asistencia sanitaria futura: NO**
- 21. Necesidad de rehabilitación domiciliaria y ambulatoria tras la estabilización: NO**
- 22. Necesidad de prótesis y ortesis tras la estabilización: NO**
- 23. Necesidad de ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal en caso de pérdida muy grave o grave tras la estabilización: NO**
- 24. Necesidad de adecuación de vivienda en caso de pérdida de autonomía personal muy grave o grave tras la estabilización: NO**
- 25. Pérdida de autonomía que afecta a la movilidad tras la estabilización: NO**
- 26. Necesidad de ayuda de tercera persona tras la estabilización: NO**
- 27. Incapacidad para realizar su trabajo o actividad profesional tras estabilización: NO**

Firmado: Dra.

En Córdoba a 12 de enero del año 2021.

ANEXO III. INFORME DE OFERTA MOTIVADA CON
DISCUSIÓN DEL NEXO CAUSAL.

TRABAJO FIN DE MASTER DE ORIENTACIÓN INVESTIGADORA

**EL NEXO DE CAUSALIDAD EN LOS ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN**

Autora: Ana Gálvez Molina

Tutora: María José Peñalosa Revidiego

VALORACIÓN DE DAÑOS PERSONALES
(INFORME DE OFERTA MOTIVADA LEY 35/2015)

1. Solicitante del informe:

Entidad aseguradora: XXX SEGUROS

Número de siniestro: 29062672

2. Identificación del perito valorador:

Dra. XX colegiado XXXX

Visitas efectuadas al lesionado:

3. Datos del lesionado:

Nombre y apellidos: XX

DNI: XX

Fecha del accidente: 12 de febrero del año 2020.

Edad: 41 años en la fecha del accidente

Accidente laboral: Sí.

Sexo: Varón

Profesión/Ocupación: Informático (en activo en la fecha del accidente)

4. Fuentes del informe:

Tras haber obtenido el preceptivo consentimiento informado del lesionado, el presente informe se basa en la siguiente documentación médica examinada:

DOCUMENTO UNO: 12.02.2020: Informe clínico tras asistencia en servicio de urgencias del H. U. Reina Sofía, firmado por la Dra. xx.

DOCUMENTO DOS: 12.02.2020: Parte de baja laboral emitido por mutua XXXXX, accidente in itinere.

DOCUMENTO TRES: 17.02.2020: Informe evolución tras asistencia en rehabilitación mutua XXXX

DOCUMENTO CUATRO: 30.03.2020: Informe tras asistencia en rehabilitación mutua XXXXX, informe de alta.

DOCUMENTO CINCO: 30.03.2020: Parte médico alta laboral emitido por mutua XXXXX.

DOCUMENTO SEIS: 06.04.2020: Informe clínico emitido por especialista en rehabilitación clínica XXXXX.

DOCUMENTO SIETE: 25.05.2020: Informe clínico de alta emitido por especialista en rehabilitación clínica XXXXX.

5. Descripción del accidente.

El lesionado sufrió accidente de circulación cuando recibió el impacto lateral izquierdo por un segundo vehículo tras no respetar un ceda el paso.

6. Antecedentes patológicos relacionados con el accidente:

Calcificaciones periarticulares a nivel del hombro izquierdo, constatadas tras estudio radiológico de primera asistencia en servicio de urgencias.

7. Descripción de las lesiones sufridas (diagnósticos).

- Esguince cervical grado I.
- Contusión en hombro izquierdo.

8. Tratamiento realizado y evolución clínica, especificando centro y fecha de la primera asistencia:

- 12.02.2020. Evaluado inicialmente en servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía, alegando cervicalgia y dolor hombro izquierdo. Exploración: movilidad cervical completa y dolorosa en grados extremos. No radiculalgia. Hombro izquierdo movilidad conservada pero dolorosa en flexoextensión últimos grados. Realizado

estudio radiológico se constata calcificaciones en hombro izquierdo y pinzamiento a nivel C5-C6. Diagnóstico: cervicalgia y omalgia izquierda.

- Evolución: inicia proceso de rehabilitación por mutua laboral, se procede a emitir baja laboral con fecha del accidente, iniciándose proceso de rehabilitación con fecha 17.02.2020 y alta de tratamiento con fecha 30.03.2020. En informe de alta se constata persistencia de molestias cervicales en lateralización izquierda con movilidad global conservada. No contractura. No radiculalgia. Así mismo, movilidad completa de hombro izquierdo.
- Tras el alta laboral inició nuevo proceso de rehabilitación con fecha 06.05.2020 en centro privado clínica XXXXX, refiere que por sintomatología vertiginosa; y así mismo se realizó RMN columna cervical prescrita por el facultativo de esta clínica con discopatía cervical C5-C6. Continuó con tratamiento rehabilitador hasta el 25.05.2020 tanto de columna cervical como de hombro izquierdo.

9. Estado actual. Resultado de la exploración física al alta (08.04.2020).

Refiere mejoría sintomática. Movilidad cervical conservada en su totalidad, no puntos dolorosos a la palpación, no radiculalgia. Funcionalidad normalizada.

10. Consideraciones Médico-Legales sobre la existencia de criterios de causalidad entre las lesiones sufridas y el accidente, con especial consideración a los traumatismos menores de la columna vertebral.

- De exclusión: consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología.

En el caso que nos ocupa, se constata mediante radiografía proceso degenerativo previo tanto a nivel del hombro izquierdo como de columna cervical, y que por sí mismos pueden originar dolor y sintomatología residual que refiere el lesionado.

- Cronológico: consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable.

Así mismo, la aparición de sintomatología vertiginosa que refiere como primera manifestación en el mes de mayo, no podemos considerarla como derivada del siniestro que nos ocupa, dada la ausencia de la misma durante el proceso de rehabilitación llevado a cabo por la mutua, no cumpliéndose el criterio cronológico o de continuidad sintomática.

Así mismo, no consideramos contemplar el segundo proceso de rehabilitación por sintomatología vertiginosa como derivada del accidente, al no cumplirse el criterio cronológico ni de exclusión.

- Topográfico: consiste en que exista una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario. En relación al dolor referido en el hombro izquierdo, consideramos existe relación con el mecanismo por colisión lateral, habiéndolo puesto en duda en caso de colisión por alcance trasero.
- De intensidad: que consiste en la adecuación biomecánica entre la lesión sufrida y el mecanismo de producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia. Se ha realizado así mismo informe de biomecánica que acredita intensidad para este tipo de colisión en valores de Delta V y daños materiales compatibles.

11. Perjuicio personal básico y por pérdida temporal de calidad de vida:

Pérdida temporal de calidad de vida básico	0
Pérdida temporal de calidad de vida moderado	47
Pérdida temporal de calidad de vida grave	0
Pérdida temporal de calidad de vida muy grave	0
TOTAL	47

12. Perjuicio personal por intervenciones quirúrgicas: NO

13. Secuelas (indicar código de la tabla 2.A.1 y su puntuación): NO

Traumatismo menor de la columna y se ha valorado como lesión temporal sin secuelas; entendiéndose así mismo la existencia de antecedentes patológicos que por sí mismo pueden justificar las molestias referidas.

14. Perjuicio estético: NO

15. Perjuicio por pérdida de calidad de vida por secuelas: NO

16. Daño moral complementario por perjuicio psico-físico: NO

17. Daño moral complementario por perjuicio estético: NO

18. Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares: NO

19. Pérdida de feto a consecuencia del accidente: NO

20. Gastos previsibles de asistencia sanitaria futura: NO

21. Necesidad de rehabilitación domiciliaria y ambulatoria tras la estabilización: NO

22. Necesidad de prótesis y ortesis tras la estabilización: NO

23. Necesidad de ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal en caso de pérdida muy grave o grave tras la estabilización: NO

24. Necesidad de adecuación de vivienda en caso de pérdida de autonomía personal muy grave o grave tras la estabilización: NO

25. Pérdida de autonomía que afecta a la movilidad tras la estabilización: NO

26. Necesidad de ayuda de tercera persona tras la estabilización: NO

27. Incapacidad para realizar su trabajo o actividad profesional tras estabilización: NO

Firmado: Dra.

En Córdoba a 12 de enero del año 2021.

Autorización de defensa del Trabajo Fin de Máster

Centro	ESCUELA DE DOCTORADO
Titulación	Máster Universitario en Acceso a la Abogacía
Curso Académico	2020/2021

Datos del alumno		
Apellidos: Gálvez Molina	Nombre: Ana	
DNI/Pasaporte: 50624356E	Correo-e: agalvezmolina@al.loyola.es	Teléfono: 670675796

Título del Trabajo Fin de Máster	
Título:	EL NEXO DE CAUSALIDAD EN LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN. EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY 35/2015

Datos del director	
Apellidos: Peñalosa Revidiego	Nombre: María José
Correo-e: mjpenalosa@penalosaabogados.com	Teléfono: 638244583

El abajo firmante, en su calidad de director, revisado el “Trabajo Fin de Máster” considera que éste está listo para su presentación, y por la presente **AUTORIZA** a el/la alumno/a arriba citado para realizar la presentación y defensa que será realizada en castellano.

Al mismo tiempo solicita que se convoque el acto de defensa y evaluación de dicho Trabajo, para que el mismo pueda tener los efectos académicos correspondientes.

En Sevilla a 17 de febrero de 2021

Fdo.: María José Peñalosa Revidiego

CONTRATO DE FORMACIÓN RENOVACIÓN

A. PARTES Y OBJETO: ASIGNATURAS

Por el presente documento Doña ANA GÁLVEZ MOLINA, con NIF 50624356E, se matricula en la/s asignatura/s que a continuación se relacionan correspondientes al Máster Universitario en Abogacía impartido por la Universidad Loyola:

Curso	Asignatura	Créditos	Carácter	Modalidad	Grupo
2020/21	Práctica Tributaria	7	OB	D	-
2020/21	Práctica Laboral y Seguridad Social	5	OB	D	-
2020/21	Práctica Mercantil	6	OB	D	-
2020/21	Práctica Mercantil	7	OB	D	-
2020/21	Práctica Profesional	30	PR	O	A
2020/21	Trabajo Fin de Máster	6	FM	O	A

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; PR: Prácticas externas; FM: Trabajo Fin de Máster; CO: Complementos de formación; NO: No aplica;

C: Reconocimiento externo CFGS; D: Reconocimiento PCEO; E: Reconocimiento externo; I: Reconocimiento interno; O: Matrícula Ordinaria; P: PMI;

B. CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

El/La estudiante abajo firmante ha leído y acepta que:

1. Los datos e información que aporta son veraces y completos, sin que haya omitido datos relevantes o que deban de ser tenidos en cuenta por la Universidad. La Universidad, en virtud de la normativa académica, comprobará la veracidad de la información y de la documentación aportada para el acceso y/o la continuación de los estudios universitarios, pudiendo ejercer las acciones que estime conveniente en caso de no sean veraces.
2. En caso de no acreditar, mediante la aportación de la documentación correspondiente, que cumple los requisitos para acceder a la universidad española, se me dará de baja de oficio, según el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.
3. Queda vinculada por el presente contrato con la Universidad Loyola para la realización de los estudios en los que fue admitida, y se compromete a cumplir y respetar la normativa de convivencia y académica vigente que le sea de aplicación. Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el centro están contenidas en las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad (Decreto 82/2013, de 16 de julio, BOJA 139 de 18 de julio), en la Normativa Académica General y en sus normas de desarrollo, que son públicas y que todos los miembros de la comunidad universitaria tienen el derecho y la obligación de conocer y respetar, quedando vinculado por la firma de este contrato a su cumplimiento. En caso de incumplimiento, la Universidad adoptará las medidas legales oportunas.

ANEXO I. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

**COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DE EXPLOTACIÓN DE TRABAJOS Y DATOS DEL
TRABAJO FIN DE MÁSTER**

Por el presente documento, yo Ana Gálvez Molina con DNI
50624356-E, mayor de edad y consciente de la responsabilidad que asumo,

ME COMPROMETO A:

- 1) Respetar la confidencialidad de todos los datos que por cualquier medio (escritos, recogidos, registrados mediante medios electrónicos o informáticos, presenciados o relatados) lleguen a mi conocimiento durante la realización de mi Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM), no desvelando ni reproduciendo en modo alguno dichos datos fuera del grupo de investigación correspondiente. Asumo que los datos anteriormente citados pueden referirse tanto a los observados por mí o relatados por cualquier otro investigador del equipo.
- 2) No hacer uso o explotación de los trabajos realizados, así como los protocolos desarrollados para el análisis de los mismos, más allá de lo estrictamente necesario para el desarrollo de mi labor y siempre contando con la autorización de mi tutor/a de TFM, cuyo nombre aparece al final de este documento. Cualquier otro posible uso del trabajo realizado deberá ser expresamente autorizado asimismo por el/la tutor/a responsable.
- 3) Seguir aquellas normativas legales y éticas que sean de aplicación para mi trabajo. Estas normativas han sido convenientemente expuestas por el/la tutor/a responsable y en el caso de que surja cualquier duda podrán ser consultadas con el Comité de Ética de la Universidad Loyola Andalucía.

SI



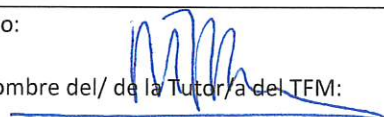
NO



Como prueba de las responsabilidades que asumo, firmo el presente documento en presencia del/ de la tutor/a del TFM.

En Sevilla, a 17 de febrero de 2021

Fdo:	Fdo:
Nombre del /de la estudiante: Ana Gálvez Molina	Nombre del/ de la Tutor/a del TFM:



4. Durante el próximo curso, la actividad docente y la evaluación del alumnado se realizará preferentemente en los campus, si bien se podrá realizar de manera presencial-virtual, sincrónica, mediante la conexión por las tecnologías de la información y comunicación que establezca la Universidad, en caso de producirse circunstancias excepcionales, que dificulten o imposibiliten la presencia de estudiantes y profesores en los espacios físicos de la Universidad o en virtud de una normativa de la autoridad competente. Esta situación incluye las técnicas de evaluación que permitan la supervisión de la realización de las distintas pruebas, todo ello con la finalidad de procurar la veraz adquisición de las competencias ligadas a los títulos oficiales por parte de los estudiantes, tal y como se ha comunicado a la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA). Esta agencia, además de verificar todos los títulos oficiales de la Universidad Loyola, ha certificado la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los centros, lo que constituye un plus de confianza en el aseguramiento de la calidad institucional de su gestión académica.
5. Se compromete a abonar los precios establecidos por la Universidad en el presente curso académico. La anulación posterior de la matrícula no confiere derecho a la devolución del precio abonado, salvo en los casos contemplados en la Normativa Académica General de la Universidad. La modificación de matrícula que, aun siendo autorizada, se realice fuera de los plazos establecidos, conllevará un recargo del 10 % en el precio de matrícula.
6. Para poder matricular el Trabajo Fin de Estudios (Grado o Master), es necesario acreditar previamente un nivel de inglés B2 o superior (acreditación de Cambridge, Trinity, TOEFL, IELTS, EOI).
7. La Universidad se reserva el derecho a decidir la no impartición de una asignatura, curso o programa si el número de matriculados no alcanza el mínimo del 30% de las plazas del curso o programa. En ese caso, se reintegrará íntegramente el precio abonado en concepto de matrícula.

C. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Información en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos):

- Los datos e información que aporta son veraces y completos, sin que haya omitido datos relevantes o que deban de ser tenidos en cuenta por la Universidad. La Universidad, en virtud de la normativa académica, comprobará la veracidad de la información y de la documentación aportada para el acceso y/o la continuación de los estudios universitarios, pudiendo ejercer las acciones que estime conveniente en caso de no sean veraces.
- **Finalidad:** las finalidades determinadas en la cláusula de protección de datos insertada en el formulario de matrícula en los términos exigidos en el Reglamento General de Protección y en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- **Legitimación:** basada en la formalización del documento de matriculación y consentimientos prestados para las finalidades adicionales.
- **Destinatarios:** no existe previsión de cesiones de datos personales a terceras empresas sin consentimiento expreso de los titulares de los datos. Pueden existir transferencias internacionales de datos (movilidad de alumnos entre universidades).
- **Derechos:** usted podrá retirar los consentimientos que hubiera prestado y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento dirigiendo su solicitud a nuestro delegado de protección de datos. Por correo ordinario a Universidad Loyola, calle Escritor Castilla Aguayo, 4 - 14004 – Córdoba o a Avda. de las Universidades s/n - 41704 - Dos Hermanas, Sevilla. Por correo electrónico a la dirección rgpd@uloyola.es.

Información adicional de protección de datos: <https://www.uloyola.es/proteccion-de-datos>

Matrícula realizada el 07/08/2020 a las 00:00:00 horas

..... *Fin del documento*